



Asamblea General

Distr. general
1 de julio de 2013
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

24º período de sesiones

Tema 3 del programa

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Informe del Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas*

Resumen

El Experto independiente presenta este informe de conformidad con las resoluciones 18/6 y 21/9 del Consejo de Derechos Humanos. En él se resumen las actividades realizadas desde agosto de 2012 hasta junio de 2013 y se abordan una serie de cuestiones inherentes al mandato. Para facilitar su consulta, se incluyen como anexos 14 documentos y declaraciones. El Experto independiente considera que el mandato tiene carácter universal y que el objetivo es lograr la convergencia de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en una síntesis coherente necesaria para lograr un orden internacional más democrático y equitativo. El amplio alcance de las resoluciones pone de manifiesto la visión del Consejo y requiere la formulación de recomendaciones pragmáticas a los Estados, la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y el propio Consejo. Tan solo será posible conseguir un orden internacional pacífico y justo si las partes interesadas colaboran para cambiar los paradigmas y aplicar el derecho internacional de manera uniforme, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los tratados de derechos humanos.

* El anexo se distribuye tal como se recibió, en el idioma original únicamente.

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–4	3
II. Actividades	5–11	3
III. Déficits de democracia y equidad	12–24	5
IV. Obstáculos.....	25–41	10
V. Buenas prácticas.....	42–50	15
VI. Conclusiones y recomendaciones	51–60	18
A. Recomendaciones a los Estados	54–56	18
B. Recomendaciones al Consejo	57	21
C. Recomendaciones a la sociedad civil y a las instituciones nacionales de derechos humanos	58–60	22
Anexo		
Excerpts or full text of relevant documents		25

I. Introducción

1. "La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto". Artículo 21 3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
2. "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural". Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3. "La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida". Declaración y Programa de Acción de Viena, párrafo 8.
4. Este informe del Experto independiente se presenta al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con las resoluciones 18/6 y 21/9 del Consejo y abarca múltiples aspectos de su mandato, con especial referencia al fomento de una participación plena, equitativa y efectiva.

II. Actividades

5. En el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 14 de junio de 2013, el Experto independiente realizó diversas actividades relacionadas directamente con los diferentes aspectos de su mandato. Envío dos cuestionarios a los Estados, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales (ONG), a los que da las gracias por todas las respuestas recibidas.
6. El 16 de mayo de 2013 organizó una consulta de expertos en Ginebra a fin de recabar aportaciones al presente informe. El 6 de junio de 2013 organizó una consulta sobre la utilización de mecanismos mundiales de ejecución para lograr un orden internacional, que será el tema de su informe a la Asamblea General.
7. El Experto independiente fue invitado y participó en numerosos actos relacionados con su mandato durante los períodos de sesiones 21º, 22º y 23º del Consejo. Durante su estancia en Nueva York para presentar su primer informe a la Asamblea General en octubre de 2012, tuvo la oportunidad de reunirse con numerosas misiones permanentes, titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y otras partes interesadas.
8. Además participó en otros actos relacionados con su mandato:
 - a) Del 1 al 3 de octubre de 2012 presentó una ponencia sobre la gobernanza democrática en el Foro Social del Consejo sobre el desarrollo centrado en las personas y la globalización¹;
 - b) Los días 4 y 5 de diciembre de 2012 participó en el primer Foro anual sobre las empresas y los derechos humanos;
 - c) Tras asistir a una reunión privada de expertos sobre la declaración del Comité Asesor sobre el derecho a la paz, celebrada los días 26 y 27 de noviembre de 2012 en

¹ Martin Khor, "Globalization and the South", Third World Network, Penang 2002.

Caux-Sur-Montreux (Suiza), en febrero de 2013, participó en el primer período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz.

d) El 5 de abril de 2013 presentó una ponencia en el Seminario sobre la repercusión de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos².

9. Además, el Experto independiente participó en:

a) Una conferencia organizada por Earths Focus en Ginebra el 10 de diciembre de 2012 con ocasión del Día de los Derechos Humanos de 2012;

b) Una mesa redonda en conmemoración del décimo aniversario del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, organizado por varias misiones y por UNICEF el 6 de febrero de 2013;

c) Una reunión para analizar la declaración sobre el derecho a la paz, organizada por la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el derecho humano a la paz, el 11 de marzo de 2013;

d) Una conferencia sobre el alcance de su mandato en la Universidad de Middlesex los días 7 y 8 de marzo de 2013; y dos conferencias en la Universidad de Nottingham, los días 8 y 9 de marzo de 2013;

e) Un seminario titulado "Un nuevo orden económico internacional democrático", organizado en París por la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, los días 23 y 24 de mayo de 2013.

10. De conformidad con la resolución 21/9 del Consejo, el Experto independiente estableció interacciones con el mundo académico, grupos de estudios e institutos de investigación, en particular el Centro del Sur, la Unión Interparlamentaria, el Comité para unas Naciones Unidas democráticas, la Fundación Kofi Annan, la Comisión Internacional de Juristas y el Centre Europe-Tierres Monde (CETIM). El 11 de octubre de 2012 celebró una reunión de trabajo con el Director Ejecutivo del Centro del Sur y también se reunió con el Secretario General de la Unión Interparlamentaria, con sede en Ginebra. El 25 de febrero se reunió con profesores de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Ginebra para hablar de la Iniciativa suiza para conmemorar el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 6 de marzo con representantes de la Comisión Internacional de Juristas para tratar del tribunal mundial de derechos humanos³.

11. En diciembre de 2012 el Experto independiente publicó, en colaboración con la Sra. Áurea Roldán, un análisis de la Observación general N° 34 del Comité de Derechos Humanos sobre la "libertad de opinión y libertad de expresión" en la *Netherlands International Law Review* (vol. LIX, págs. 425 a 455), y la importancia del acceso a la información y de la libertad de los medios de comunicación para lograr un orden internacional democrático.

² Véase: <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Seminars/Pages/WorkshopCoerciveMeasures.aspx>, capítulo 7.1 sobre el excepcionalismo y unilateralismo de los Estados Unidos, en Rosa Freedman, *The United Nations Human Rights Council*, Routledge 2013, págs. 151 a 154.

³ Véase: <http://www.udhr60.ch/docs/World-court-final1211%20.pdf>; <http://www.udhr60.ch/>.

III. Déficits de democracia y equidad

12. Un orden internacional democrático y equitativo es inherente a los derechos humanos fundamentales compartidos por toda la humanidad⁴. Podrá lograrse paso a paso cuando todos los países y todos los pueblos tomen la iniciativa a nivel local, regional e internacional, conscientes de que dicho orden internacional debe basarse en la Carta de las Naciones Unidas y los tratados de derechos humanos, que en su conjunto constituyen lo que sin duda podemos llamar la Constitución del mundo moderno, que está sujeta, como es natural, a las necesarias reformas. En el Preámbulo y los Artículos 1 y 2 de la Carta se expresa la intención de los "pueblos de las Naciones Unidas" de construir un orden internacional de paz, derechos humanos y desarrollo.

13. Con respecto a un orden internacional democrático y equitativo, es obvio que dicho orden depende de la igualdad soberana de los Estados, del derecho de los pueblos a la libre determinación y de un compromiso de compartir las riquezas del planeta en un espíritu de solidaridad internacional⁵. Si bien la libre determinación está estrechamente relacionada con la idea de democracia, la participación en las decisiones internacionales dista mucho de producirse en condiciones de igualdad e incluso de equidad. De hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es democrático, ni lo son las instituciones de Bretton Woods. Hay otros participantes que no tienen una estructura ni un *modus operandi* democrático, en particular algunas organizaciones elitistas como la Comisión Trilateral, el Consejo del Atlántico y el Grupo Bilderberg, así como conferencias más conocidas como el Grupo de los 8, el Grupo de los 20, el Foro Económico Mundial y alianzas militares como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Mientras tanto, las empresas transnacionales ejercen cada vez mayor influencia en las decisiones mundiales y condicionan más las opciones de los Estados soberanos y el disfrute de los derechos humanos⁶. Las empresas, ya sean nacionales o multinacionales, no se rigen por principios democráticos sino que buscan sobre todo los beneficios, y sus decisiones afectan al orden internacional. Se necesitan reformas para conseguir la participación equitativa de los Estados, grandes y pequeños, en las decisiones mundiales, sobre todo en las decisiones relativas al mantenimiento de la paz, el medio ambiente, las relaciones comerciales y el patrimonio común de la humanidad.

14. En una democracia el pueblo es soberano. Por consiguiente, para la promoción de la democracia a nivel local, nacional y regional, la sociedad civil tiene que hacer oír más su voz en todos los procesos políticos. La situación en algunos países es grave, ya que no tienen asegurada la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación ni la celebración de elecciones libres e imparciales; los líderes de la oposición son detenidos o asesinados; los periodistas, quienes denuncian irregularidades y los blogueros, acosados, intimidados y detenidos; las manifestaciones públicas están prohibidas; los manifestantes pacíficos son masacrados, las elecciones son una farsa, etc. Varios relatores han documentado estas violaciones⁷, el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado

⁴ Véase por ejemplo: http://www.un.org/en/globalissues/democracy/human_rights.shtml; http://www.un.org/en/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml; http://www2.ohchr.org/english/issues/rule_of_law/democracy.htm; *Democracy, Human Rights and the Emerging Global Order*, seminario organizado por el proyecto para la gestión de un orden mundial de la Brookings Institution, 29 y 30 de noviembre de 2012.

⁵ Informe del Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, A/HRC/23/45 y Add.1.

⁶ Salvador Allende en las Naciones Unidas, 1972, <http://www.youtube.com/watch?v=knewNLlpkMw>.

⁷ Véanse, entre otros, los informes del Experto independiente sobre cuestiones de las minorías; el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados; el Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra

resoluciones pertinentes y el Comité de Derechos Humanos ha aprobado una jurisprudencia importante a este respecto⁸. El Experto independiente está muy preocupado por estas situaciones en que se vulnera de manera flagrante el estado de derecho y el respeto de principios fundamentales como la celebración de elecciones libres, imparciales y competitivas.

15. Es crucial que los sistemas electorales sean libres e imparciales, garanticen la libre formación y funcionamiento de los partidos políticos, permitiendo hacer el mejor uso posible de la libertad de asociación⁹, y respeten el principio de no discriminación, de manera que todos los grupos, incluidos los grupos de la oposición y los que defienden opiniones discrepantes, puedan participar en el proceso electoral. Estas normas deben aplicarse no solo en las elecciones generales e importantes, sino también en las consultas locales. Para que haya participación no basta con emitir el voto: se requiere la capacidad de las personas y los pueblos de expresar libremente sus opiniones y hacer oír su voz "para influir en las decisiones que afectan a su comunidad"¹⁰.

16. Pero incluso en Estados claramente democráticos, no hay motivos para la autocomplacencia. Aunque se celebren elecciones formalmente libres, el proceso electoral de muchos países no funciona bien y los resultados electorales no corresponden siempre a los deseos del electorado. A fin de satisfacer los requisitos democráticos, debe consultarse a la opinión pública y la elección de candidatos ha de ser libre y transparente. Debe disponerse de métodos para determinar la voluntad popular, por ejemplo, mediante frecuentes encuestas de opinión y la celebración de referendos. Como señalan muchos observadores, la democracia representativa a menudo revela una desconexión entre los parlamentarios y el pueblo, de modo que la agenda de los parlamentarios no corresponde a los deseos del electorado. Por este motivo muchos países han caído en la apatía, y el cinismo y registran un importante absentismo electoral. Se necesitan no solo parlamentos, sino parlamentarios que representen realmente los deseos del electorado. En casi todos los países, las mujeres están infrarrepresentadas y en muchos de ellos esencialmente privadas de sus derechos¹¹. Esta privación de derechos no es democrática y debe corregirse. Las mujeres han de tener una mayor capacidad de participar de manera significativa en la adopción de decisiones¹².

17. Este segundo informe que se presenta al Consejo, y que abarca múltiples aspectos de sus resoluciones 18/6 y 21/9, se centra sobre todo en la cuestión de la participación. No es una recopilación de hechos y cifras, sino un intento de definir conceptos y detectar obstáculos. Es posible definir el concepto de democracia, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Sin embargo, hay organizaciones internacionales que se dicen demócratas y no lo son, y algunos países que invocan constantemente la democracia resultan ser en la práctica autócratas u oligárquicos. La "democracia representativa"

el terrorismo; el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; y los Relatores Especiales sobre Belarús, Camboya, Côte d'Ivoire, Eritrea, la República Islámica del Irán y el Sudán.

⁸ Jakob Möller y Alfred Zayas, *United Nations Human Rights Committee Case Law*, 2009.

⁹ Véase el informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, documento A/HRC/20/27.

¹⁰ Véase: www.un.org/en/events/humanrightsday/2012/message.shtml.

¹¹ Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), informe A/HRC/23/50 del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.

¹² Recomendación general N° 23 del CEDAW y Observación general N° 15, párr. 16 a), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación general N° 28 del Comité de Derechos Humanos.

traiciona al electorado cuando las leyes no tienen sus raíces en el pueblo sino en las oligarquías. Por lo tanto, son cada vez más frecuentes los estudios sobre el concepto y las modalidades de la democracia directa¹³.

18. La democracia entraña una correlación entre el interés público expresado por la mayoría de la población y las políticas oficiales que la afectan. El término abarca diversas manifestaciones, incluida la democracia directa, participativa y representativa, pero los gobiernos deben responder ante el pueblo y no ante intereses especiales como el complejo militar industrial, el sector financiero y las empresas transnacionales. La democracia es incluyente y no ha de privilegiar a una aristocracia antropológica. Requiere la fijación de normas básicas para el establecimiento y organización del Estado y su relación con la sociedad, que han de ser aceptadas por los ciudadanos. Exige también consultar al pueblo y respetar la voluntad de los votantes. Aunque se basa en el gobierno de la mayoría, una sociedad democrática debe reconocer y respetar los derechos de las personas, las minorías y los grupos. En otras palabras, el gobierno de la mayoría debe entenderse en el contexto del estado de derecho y la dignidad humana. Como puso de relieve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "el pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras son las características de una 'sociedad democrática'. Aunque los intereses individuales deben subordinarse en ocasiones a los de un grupo, la democracia no significa simplemente que siempre deban prevalecer los puntos de vista de la mayoría: hay que lograr un equilibrio que garantice un trato justo y equitativo de las minorías y evite cualquier abuso de una posición dominante"¹⁴. Así se resuelve la tensión entre populismo y derechos humanos, ya que no debe abusarse de la democracia para reducir los derechos humanos, por ejemplo legitimando la tortura o la pena capital, aunque pueda invocarse o manipularse la opinión pública para exigirlo. Por tanto, es necesario reforzar la aplicación de las declaraciones nacionales y regionales de derechos y garantías fundamentales para crear unas condiciones y circunstancias propicias para que florezca la democracia, apoyada por una judicatura independiente que ofrezca la protección necesaria de los intereses mayoritarios y minoritarios.

19. La democracia ha ido evolucionando a lo largo de la historia y adaptándose a las necesidades de sociedades y culturas muy diferentes. No hay un único "modelo" de democracia¹⁵ y nadie debe pretender que existe una "panacea universal" y que hay que exportar una determinada modalidad de democracia a países que funcionan de otra manera y cuya vida política se inspira en otras tradiciones. Al abordar el concepto de democracia, hay que prescindir de las etiquetas y hacer la pregunta crucial: ¿cuál es la correlación entre las necesidades y la voluntad del pueblo y las decisiones políticas que le afectan? Esta pregunta tiene el corolario siguiente: ¿en qué medida se dispone de información veraz, fidedigna y plural para facilitar una participación real de la población en el desarrollo de la ley y de la práctica? La democracia no es el producto final, sino el medio para llegar a un fin: el disfrute universal de los derechos humanos.

¹³ Foro Mundial sobre la Democracia Directa Moderna, Montevideo, 14 a 16 de noviembre de 2012, <http://2012globalforum.com/>, <http://movementfordirectdemocracy.com/strategy.html>, <http://www.directdemocracynow.org/>, Centro para la Democracia Directa, Universidad de Zurich, <http://www.c2d.ch/>, Conferencia Mundial sobre la Democracia Directa, http://www.tfd.org.tw/iri-asia/?mod=News&page=Direct_Democracy_Developments&id=465. Andrea Good/Bettina Platipodis, *Direkte Demokratie*, Berna 2013. Daniel Thürer, "Völkerrechtliches Jus Cogens und Volkssouveränität" en Good/Platipodis, págs. 439 a 452. Daniel Thürer, *Direkte Demokratie. Eine Form des Widerstands?* en Hans v. Arnim (ed.) *Widerstand*, Berlín 2012, págs. 63 y ss. René Roca, *Wenn die Volkssouveränität wirklich eine Wahrheit werden soll*. Zurich 2012; Paul Widmer, *Die Schweiz als Sonderfall*, Zurich 2008.

¹⁴ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Case of Leyla Sahin vs. Turkey*, Application N° 44774/98, párr. 108.

¹⁵ Preámbulo de la resolución 19/36 del Consejo de Derechos Humanos, de 23 de marzo de 2012.

20. Para verificar si hay o no una democracia internacional en los tiempos que corren, es posible preguntar si los Estados y los pueblos, incluidos los que no están representados, han tenido una oportunidad democrática de participar en decisiones acerca de cuestiones importantes, como la guerra y la paz, el calentamiento del planeta, el medio ambiente, las relaciones comerciales, el acceso a la medicina y el patrimonio común de la humanidad. Más concretamente, ¿aprobaría una mayoría de Estados la aplicación de regímenes de sanciones de manera selectiva y no uniforme? ¿Habrían aprobado el uso de la fuerza contra Serbia en 1999, contra el Iraq en 2003 y contra Libia en 2011? ¿Hubiera debido intervenir la comunidad internacional para determinar si se habían agotado todas las vías de negociación pacífica? ¿Debería permitirse cierta participación de la sociedad civil en las decisiones "técnicas" sobre el libre comercio y otros acuerdos que provocan un desempleo generalizado? Y con respecto a los acuerdos regionales y al derecho constitucional regional, ¿debería permitirse que los ciudadanos de los países interesados votaran directamente en favor o en contra de los tratados que suponen una restricción considerable de la soberanía nacional? Por ejemplo, ¿deberían los ciudadanos de la Unión Europea haber tenido la oportunidad de votar en un *referendum* acerca de la aprobación del Tratado de Lisboa? ¿Deberían haber podido expresar su opinión acerca de las decisiones de imponer o levantar embargos en situaciones de guerra civil? Con respecto a la reunificación de la isla de Chipre, ¿acaso una convención constitucional en la que todas las comunidades chipriotas hubieran podido negociar una constitución básica habría permitido obtener un instrumento democrático para salir del atolladero mediante la participación de todos los interesados¹⁶? Esta lista no exhaustiva de conflictos internacionales pone en evidencia que las consultas han sido deficientes o del todo inexistentes precisamente en los casos en que más necesaria hubiera sido la participación de la ciudadanía.

21. A fin de verificar si existe o no una democracia nacional en los tiempos que corren, puede ser interesante estudiar cómo se han tomado y se están tomando decisiones sobre cuestiones tales como el aumento de la vigilancia electrónica y la videovigilancia de personas, las condiciones de detención, los casos de detención indefinida, la seguridad social, la atención de salud, el empleo, el matrimonio, el aborto, etc. y en qué medida ha habido una auténtica participación popular en esas decisiones. Más concretamente, ¿habría aceptado una mayoría de la población las graves restricciones de los derechos humanos impuestas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001? ¿Habría aceptado las prioridades fijadas por los gobiernos en las llamadas "medidas de austeridad"? ¿Aprobaría el rescate de los bancos? ¿Aprobaría la creciente militarización y la enorme parte del presupuesto asignada al sector de la "defensa"? ¿Permitiría la participación de su país en aventuras militares no refrendadas por resoluciones del Consejo de Seguridad ni permitidas en virtud del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas? ¿Permitiría la venta de armas a beligerantes de guerras civiles en países extranjeros? ¿Permitiría la utilización de aviones no tripulados sin tomar en consideración las bajas civiles y los daños colaterales? ¿Hubieran aprobado los ciudadanos de las 54 naciones que cooperaron con el sistema de entregas extrajudiciales, prisiones secretas, "agujeros negros", etc. los actos ilegales cometidos en nombre de la "guerra contra el terrorismo"¹⁷? ¿Permitirían que tribunales militares juzgaran a civiles? ¿Qué papel han desempeñado los medios de comunicación en la creación de una atmósfera de amenaza inminente y temor por medio de informaciones falsas e informes sesgados, en contravención de la prohibición de la propaganda en favor de la guerra que figura en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? ¿Se aprobaría en un *referendum* público la adopción de niños por parejas del mismo sexo? ¿Qué sentido tiene que manifestaciones masivas a favor de las reformas democráticas y los derechos humanos sean reprimidas con un uso excesivo de la fuerza por

¹⁶ Andreas Auer y otros, *A principled basis for a just and lasting Cyprus settlement in Light of International and European Law*, Bruselas, 2005. Andreas Auer/Vasiliki Triga, *A Constitutional Convention for Cyprus*, Berlín, 2009. A de Zayas, "The Annan Plan", *The Cyprus Yearbook of International Relations*, 2006, págs. 163 a 178.

¹⁷ Véase el documento A/HRC/22/52.

parte de la policía? ¿Deben aprobarse leyes desde arriba sin un debate público previo y a pesar de las protestas masivas de la población? ¿Son las poblaciones rehenes de los parlamentarios e incapaces de influir en las decisiones políticas hasta las elecciones siguientes, que pueden proponer o no diversas opciones o bien solo candidatos cuyas decisiones sorprenden a veces a sus electores? Muchas de estas cuestiones exigen debates y consultas públicas y no deben soslayarse ni decidirse a espaldas de los ciudadanos.

22. Sin duda hay margen de mejora en todos los países. Ningún país obtiene la máxima calificación en democracia. Si bien algunos países tienen puntos fuertes, también pueden presentar graves lagunas en otros aspectos. Por ejemplo, algunos países han realizado enormes progresos en materia de derechos civiles y políticos, pero llevan retraso en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En algunos Estados y territorios hay minorías, poblaciones indígenas, poblaciones ocupadas, personas no representadas y personas que viven en la extrema pobreza¹⁸, que no tienen la posibilidad de participar activamente en las decisiones¹⁹. Deben adoptarse medidas eficaces, en particular un sistema judicial que garantice la aplicación de los derechos humanos, a fin de dar mayor poder a las mujeres, las minorías, las poblaciones indígenas, las personas no representadas, las personas con discapacidad, etc. de manera que puedan participar debidamente en la vida política y en las decisiones que les afectan, sobre su derecho a la libre determinación, su medio ambiente tradicional, su cultura y creencias.

23. Cada país es responsable de mejorar sus sistemas económico, judicial, político y social. La sociedad civil debe tener las máximas oportunidades de contribuir a este proceso. Si cada país da un paso adelante, todas las poblaciones se beneficiarán y se fomentará la solidaridad internacional.

24. Muchos observadores han denunciado los déficits democráticos existentes en el plano internacional y nacional; señalado amenazas a la paz internacional; advertido complejo militar industrial; y denunciado la represión en la justicia social y la crisis de la democracia, que algunos detectan en la falta de participación pública y la imposición de un cierto tipo de democracia de grupos de presión, posdemocracia o pseudodemocracia, que de democrático solo tiene el nombre, porque las decisiones reales las toman empresas e instituciones financieras que no son elegidas ni deben responder ante el pueblo. Entre ellos cabe citar: Samir Amin²⁰, Francis Boyle²¹, Noam Chomsky²², Ramsey Clark²³, Marjorie Cohn²⁴, Giovanni Cornia²⁵, David Cromwell²⁶, Colin Crouch²⁷, Barbara Ehrenreich²⁸,

¹⁸ Véase: <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13369&LangID=E>.

¹⁹ A/HRC/13/25, recomendaciones formuladas por el Foro sobre Cuestiones de las Minorías, en su segundo período de sesiones, sobre las minorías y su participación política efectiva. Informes del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.

²⁰ *Maldevelopment – Anatomy of a Global Failure*, segunda edición, Oxford, 2011.

²¹ *World Politics and International Law*, 2005.

²² *Hopes and Prospects*, Londres, 2010.

²³ *From Civil Rights to Human Rights*, <http://ddce.utexas.edu/news/2012/11/07/nov-12-from-civil-rights-to-human-rights-talk-by-ramsey-clark/>.

²⁴ Véase: <http://www.marjoriecohn.com/>.

²⁵ Véase: http://www.wider.unu.edu/aboutus/people/external-project-directors/en_GB/cornia-external/.

²⁶ *Why are we the Good Guys? Reclaiming Your Mind from the Delusions of Paranoia*. Winchester, 2012.

²⁷ *Post-Democracy*, Cambridge, 2004.

²⁸ *Nickel and Dimed: On (not) Getting by in America*, 2001, <http://www.barbaraehrenreich.com/nickelanddimed.htm>.

Diane Elson²⁹, Glenn Greenwald³⁰, Stephany Griffith-Jones³¹, Chris Harman³², David Harvey³³, Edward Herman³⁴, Richard Jolly³⁵, Naomi Klein³⁶, Robert McChesney³⁷, Justin Lewis³⁸, Jeanne Mirer³⁹, Ralph Nader⁴⁰, Isabel Ortiz⁴¹, Karen Parker⁴², Ruth Pearson⁴³, John Pilger⁴⁴, Arundhati Roy⁴⁵, Frances Stewart⁴⁶, Alejandro Teitelbaum⁴⁷, Tzvetan Todorov⁴⁸, Roland Weyl⁴⁹, Luis Roberto Zamora⁵⁰, Jean Ziegler⁵¹ y Howard Zinn⁵². El diagnóstico es claro, pero resulta difícil cambiar el *statu quo* porque a menudo los elegidos no gobiernan y los que gobiernan no han sido elegidos.

IV. Obstáculos

25. Numerosas respuestas a los cuestionarios, intervenciones en las consultas del 16 de mayo y el 6 de junio de 2013, así como comunicaciones recibidas por el Experto independiente, revelan disfunciones en la participación democrática y equitativa de las partes interesadas tanto en el plano nacional como en el internacional.

26. Existen múltiples obstáculos para una participación genuina en las decisiones que se adoptan a nivel internacional. Un orden internacional democrático y equitativo entraña un compromiso de diálogo incondicional a fin de que todos los Estados y pueblos tengan la oportunidad de participar en las decisiones mundiales. La guerra constituye una ruptura de las relaciones de amistad entre Estados previstas en la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, y una violación de los Artículos 2 3) y 2 4) de la Carta de las Naciones Unidas. La industria de guerra en muchos países y el enorme comercio de todo tipo de armas generan corrupción y alimentan los conflictos en todo el mundo, ya que así se consiguen beneficios. La existencia de un complejo militar industrial inmensamente

²⁹ "Emerging Issues with a Focus on Economic Decision-Making" en United Nations Economic Commission for Europe (ed.), *Gender Gaps and Economic Policy*, UNECE, Ginebra, 2007.

³⁰ *With Liberty and Justice for Some: How the Law is Used to Destroy Equality and Protect the Powerful*, Nueva York, 2012.

³¹ Stephanie Griffith-Jones y otros (eds.), *Time for a Visible Hand: Lessons from the 2008 World Financial Crisis*, Oxford, 2010.

³² *Economics of the Madhouse: Capitalism and the Market Today*, Londres, 1995.

³³ *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford, 2005.

³⁴ *The Myth of the Liberal Media: An Edward Herman Reader*, 1999.

³⁵ Richard Jolly y otros, *Be Outraged: There are alternatives*, 2012.

³⁶ *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*, 2007.

³⁷ *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*, Nueva York, 2000.

³⁸ *Constructing Public Opinion: How Political Elites Do What They Like and Why We Seem to Go Along With It*, Nueva York, 2001.

³⁹ Véase: <http://www.iadllaw.org/en/node/390>.

⁴⁰ *The Good Fight: Declare your Independence and Close the Democracy Gap*, 2004.

⁴¹ Véase: <http://www.isabelortiz.info/>.

⁴² Association of Humanitarian Lawyers, <http://www.humanlaw.org/>.

⁴³ Véase: <http://www.polis.leeds.ac.uk/about/staff/pearson/>.

⁴⁴ *The New Rulers of the World*, Londres, 2002.

⁴⁵ *Listening to Grasshoppers: Field Notes on Democracy*, Nueva Delhi, 2009.

⁴⁶ *Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Conflict in Multiethnic Societies*, Basingstoke, Reino Unido, 2008.

⁴⁷ Véase: <http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Alejandro%20Teitelbaum&inicio=0>.

⁴⁸ *Les ennemis intimes de la démocratie*, París, 2012.

⁴⁹ *Nous peuples des Nations Unies: Sortir le droit international du placard*, CETIM, Ginebra, 2008.

⁵⁰ Véase: <http://www.nlgazcentral.org/luis-roberto-zamora-bolanos-speaks-on-peace/>, y <http://www.peaceasahumanright.org/Peace/HOME.html>.

⁵¹ *Destruction massive: Géopolitique de la faim*, París, 2011.

⁵² *The Historic Unfulfilled Promise*, Nueva York, 2012.

poderoso constituye un peligro para la democracia, tanto en el plano internacional como en el nacional, porque este sigue su propia lógica y actúa prescindiendo de la participación popular. El Presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower ya advirtió de este peligro el 17 de enero de 1961⁵³. La enorme parte proporcional de los presupuestos destinada a actividades armamentistas y a otras industrias de guerra deja poco espacio para la promoción de los derechos humanos. Además, en una época de armas de destrucción masiva, no hay alternativa a la coexistencia pacífica. El unilateralismo es por su propia naturaleza incompatible con un orden democrático internacional. Pese a la voluntad de la comunidad internacional, e incumpliendo resoluciones de la Asamblea General aprobadas casi por unanimidad, algunos Estados siguen optando por el unilateralismo con total impunidad.

27. La realidad de los desequilibrios económicos, políticos y militares ejerce presión sobre los débiles que no tienen otra opción que doblegarse ante las distintas formas de coerción, amenazas, sanciones o el ofrecimiento alerno de incentivos y represalias. Esta asimetría dio lugar a la creación del movimiento de los no alineados y de numerosas entidades regionales (la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Organización de Cooperación Islámica (OCI)), cuyos miembros no siempre aplican normas democráticas, pero intentan equilibrar el abrumador poder económico y político de unas cuantas naciones.

28. Durante la consulta de expertos organizada por el Experto independiente en Ginebra el 16 de mayo de 2013, los participantes expresaron la esperanza de que se reformara la manera de tomar decisiones en los asuntos mundiales, por ejemplo sobre cuestiones tales como la guerra y la paz, los desequilibrios comerciales, los precios de los productos básicos, los mercados financieros, el medio ambiente y el mantenimiento de la paz a nivel internacional. En el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial los sistemas de votación no son equitativos en la medida en que la mayoría de los votos se conceden a los gobiernos de países desarrollados, de manera que resultan beneficiados los intereses financieros de las élites a expensas de los desfavorecidos. Es preciso reformar estas instituciones⁵⁴, el Consejo de Seguridad⁵⁵ y la Organización Mundial del Comercio. Quizás deberían crearse instituciones alternativas⁵⁶.

29. En el plano nacional hay también muchos obstáculos. En las comunicaciones recibidas de organizaciones de la sociedad civil se afirma que, por diversas razones, que varían de un país a otro, algunas personas no pueden participar en las decisiones. Como se destacó en el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, la discriminación estructural y social contra la mujer le impide

⁵³ President Dwight D. Eisenhower, <http://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY>. *Public Papers of the Presidents of the United States*, Dwight D. Eisenhower, págs. 1035 a 40.

⁵⁴ Yilmaz Akyüz, *Reforming the IMF: Back to the Drawing Board*, Third World Network, Penang, Malasia, 2006.

⁵⁵ Asociación de Derecho Internacional, Grupo de Estudio sobre la Reforma de las Naciones Unidas, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1971008; conferencias de Vera Gowlland en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, "The Relationship between the Security Council and the International Criminal Court", http://untreaty.un.org/cod/avl/ls/Gowlland-Debbas_PS.html; "The Relationship between Collective Security and State Responsibility", http://untreaty.un.org/cod/avl/ls/Gowlland-Debbas_S.html; Alejandro Teitelbaum, "Naciones Unidas: ¿Reformarla o reconstruirla?" publicado en *Derechos de los pueblos y gobernanza mundial*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (HUHEZI) de la Universidad de Mondragón, Iruñea, 2007, págs. 77 a 118; Erskine Childers y Brian Urquhart, *Renewing the United Nations System*, Uppsala 1994; Joseph Schwartzberg, *Revitalizing the United Nations*, Nueva York, 2004.

⁵⁶ Samir Amin, *Global History – a View from the South*, Oxford, 2010; Samir Amin, *Ending the Crisis of Capitalism or Ending Capitalism?*, Oxford, 2011.

tomar parte en la vida política y pública en casi todos los países del mundo⁵⁷. Es inaceptable que varias mujeres que han participado en protestas pacíficas en algunas partes del mundo hayan sufrido actos de violencia, en algunos casos, de violencia sexual. Los Estados deben demostrar su determinación de poner fin a la violencia estructural y aplicar medidas positivas para que más de la mitad de la población de la Tierra pueda participar en la vida pública y política.

30. Los grupos indígenas⁵⁸ sostienen que se les ha negado una representación efectiva y que su participación es esencialmente simbólica ya que, cualquiera que sea su punto de vista, los gobiernos siguen sus propios programas y apenas se dignan escucharlos. En particular, algunos indígenas denuncian violaciones graves de los tratados⁵⁹ acordados por sus antepasados con las potencias europeas, mientras que otros dicen que fueron engañados cuando se celebraron esos tratados. Mantienen su derecho a la libre determinación, la autonomía y la identidad, incluida la soberanía sobre sus recursos naturales, que les han sido arrebatados sin su consentimiento y sin una compensación adecuada, en contravención del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una cuestión fundamental para muchos indígenas es su condición de pueblos, ya que *no* quieren la ciudadanía del país que los colonizó; en algunos casos impugnan los referendos de libre determinación en los que, según afirman, apenas tuvieron la posibilidad de expresar su voluntad⁶⁰. Mantienen que el derecho de libre determinación no puede ejercerse contra la voluntad de la población interesada, y que en los referendos de libre determinación tan solo deberían poder votar los indígenas, no los colonizadores.

31. Muchos otros grupos en peligro (como los defensores de los derechos humanos, los estudiantes, las minorías y las personas que viven en la pobreza) no pueden participar realmente en la sociedad y en la adopción de decisiones. Es esencial que los Estados adopten medidas apropiadas para que no haya obstáculos "que agraven su exclusión y a menudo perpetúen el privilegio de las élites que pueden influir directamente en la política"⁶¹.

32. Las preocupaciones de la gran masa de manifestantes que piden reformas democráticas, así como de los indignados y otros movimientos de protesta (*occupy*), merecen una mayor atención democrática y la adopción de medidas correctivas. La participación democrática no puede limitarse a las elecciones; tiene que ejercer una influencia directa en el proceso democrático, sea como sea. Los regímenes dictatoriales que no celebran elecciones, los regímenes semidemocráticos con elecciones falseadas y las democracias disfuncionales con elecciones formales obstaculizan el orden democrático internacional. Habría que mejorar gradualmente los sistemas electorales y los gobiernos deberían acoger favorablemente una supervisión de las elecciones en todo el mundo⁶². Pero toda participación auténtica empieza desde la base y ha de contar con un sistema fiable de selección de candidatos que representen realmente a los votantes. Cuando los candidatos

⁵⁷ A/HRC/23/50.

⁵⁸ Véanse los informes del Relator Especial sobre los pueblos indígenas. Véase también la declaración del Relator Especial sobre los pueblos indígenas con ocasión del 12º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, 22 de mayo de 2013.

⁵⁹ Véase: <http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/696c51cf6f20b8bc802567c4003793ec>.

⁶⁰ Véanse, por ejemplo, los "informes paralelos" presentados por grupos indígenas al Comité de Derechos Humanos y al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y las recomendaciones que figuran en las observaciones finales pertinentes, <http://www1.umn.edu/humanrts/usdocs/hruscomments2.html>.

⁶¹ A/HRC/23/36, párr. 14.

⁶² Global Commission on Elections, Democracy and Security, *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*.

son elegidos por la maquinaria de los partidos y solo se seleccionan a las elites, entonces el sistema es disfuncional y produce candidatos que no responden ante sus electores sino a la disciplina de partido y a quienes lo financian.

33. Por definición, una democracia está orientada al interés público, no al beneficio de los accionistas ni a los mercados. Hay aspectos del capitalismo desregulado y de la privatización que son simplemente incompatibles con la idea de democracia, porque está claro que no son lo que el *demos* quiere o incluso necesita, sino lo que desean un puñado de inversores a fin de lograr los máximos beneficios con la excusa de que el efecto de "filtración" de la riqueza acabará ayudando también a los pobres. Pero, ¿está de acuerdo el pueblo con esa filosofía de la "filtración", que no suele funcionar? ¿Cómo pueden exigirse responsabilidades a las instituciones financieras cuando los mercados desregulados fallan y provocan un enorme desempleo? Sin embargo, los gobiernos han "rescatado" a la industria bancaria, a expensas de los pobres que esperan en vano los beneficios de la filtración y que se hallan inermes ante este abuso de poder generalizado.

34. La privatización de las funciones públicas constituye un ataque a la democracia, porque el interés público tan solo puede protegerse mediante una entidad pública, ya sea una administración municipal o un parlamento, pero no por la junta directiva de una empresa que solo desea conseguir beneficios y abrir nuevos mercados.

35. En mi informe inicial al Consejo señalé una serie de obstáculos, algunos de ellos de carácter semántico. El lenguaje mismo dificulta el análisis correcto de las cuestiones sociales y económicas cuando se utiliza una terminología vaga o engañosa o cuando los diferentes países y medios de comunicación utilizan palabras como "democracia", "libertad", "estado de derecho", "comunidad internacional", "consenso", "globalización", "paz", "terrorismo", etc., con distintos sentidos. Hay también obstáculos genéricos como la "hubris", el fariseísmo, el cinismo moral, el nihilismo moral y la limitación artificial y autoimpuesta del pensamiento, como por ejemplo el enfoque positivista del derecho y de los derechos humanos. Otro obstáculo es la falta de solidaridad entre los representantes de la sociedad civil, que deberían defender la igualdad de la dignidad humana de todas las víctimas y rechazar que los medios de comunicación den mayor realce a las víctimas "políticamente correctas" e ignoren sistemáticamente a las demás. La competencia entre víctimas es un fenómeno muy triste que pone de manifiesto la utilización de un doble rasero. La sociedad civil no solo tiene derechos sino también deberes, que debe cumplir de manera ética y responsable. Los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones intergubernamentales y las ONG deben creer firmemente que todos los hombres son hermanos y que los derechos humanos son universales; no se trata de derechos *à la mode*.

36. Una de las premisas en la que se basa el presente informe es que la democracia necesita una prensa libre que informe a la ciudadanía, a fin de que esta pueda juzgar por su cuenta, sin sufrir la censura del gobierno ni la manipulación de las empresas que controlan los medios de comunicación. Hay una legítima expectativa democrática de que los medios de comunicación no solo ofrecerán diversas ideas sino que también tendrán diversos propietarios. A nivel nacional, cada gobierno debería examinar atentamente su legislación sobre telecomunicaciones, en particular la excesiva concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y utilizar leyes antitrust para fragmentar los conglomerados que dificulten el debate abierto y la diversidad de ideas. Lo que se presenta como periodismo en muchos países sirve de hecho para adoctrinar a la población, no para informarla. Con demasiada frecuencia el periodismo presenta un sesgo estructural en favor de las elites, el gobierno y los intereses empresariales.

37. Mientras que la libertad de opinión, de los medios de comunicación, de reunión pacífica y de asociación es absolutamente esencial para toda democracia, estos derechos no existen en algunos países y están vacíos de contenido en otros. La censura estatal constituye

una violación obvia del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero la censura también se practica en el sector privado y el resultado antidemocrático es siempre el mismo: una opinión pública manipulada. La injerencia del Estado en los medios de comunicación e Internet es un problema mundial. El 17 de julio de 2011, el Comité de Derechos Humanos aprobó la Observación general N° 34, en la que abordó las amenazas a la libertad de opinión y la libertad de expresión, incluidas las leyes sobre la difamación, las leyes sobre la blasfemia y las leyes sobre la memoria histórica, que obstaculizan la libre circulación de ideas y los necesarios debates ideológicos:

a) "Las leyes sobre difamación deben redactarse con cuidado para que... no sirvan en la práctica para atentar contra la libertad de expresión. Todas las leyes de esta índole, y en particular las leyes penales relativas a la difamación, deberían incluir medios de defensa tales como la prueba de la verdad..." (párr. 47).

b) "La prohibición de las demostraciones de falta de respeto por una religión u otro sistema de creencias, incluidas las leyes sobre la blasfemia, es incompatible con el Pacto..." (párr. 48).

c) "Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes en lo tocante al respeto de las libertades de opinión y expresión. El Pacto no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados..." (párr. 49).

38. Esas leyes tienen implicaciones y consecuencias totalitarias, violan la dignidad humana, el derecho a un debate abierto, la libertad académica y en última instancia provocan el estancamiento intelectual y la autocensura⁶³, que tienen consecuencias negativas para la capacidad de las personas de participar en las decisiones.

39. Para formar a ciudadanos responsables y para ejercer el voto es indispensable tener acceso a una información verídica y fiable procedente de fuentes diversas. Las libertades de expresión y de reunión pacífica no son solo derechos sino también deberes cívicos que hay que cumplir de manera libre y abierta en toda democracia. La libertad de expresión no consiste únicamente en el derecho de hacerse eco de ideas políticamente correctas, sino en el derecho de expresar las propias convicciones personales, lo que incluye necesariamente el derecho a equivocarse. En algunos países, el derecho de manifestación está considerablemente restringido y obstaculizado por múltiples trámites burocráticos; en otros se detiene o incluso se mata a los manifestantes.

40. Cada vez más parece que algunos medios de comunicación transmiten principalmente los puntos de vista de las élites. Incluso en cuestiones controvertidas no mantienen ninguna imparcialidad y hay pocas oportunidades de expresar opiniones que discrepen de las de los anunciantes. La omnipresencia de la publicidad y la comercialización excesiva de los medios de comunicación también contribuyen a desorientar a la opinión pública, desviando su atención de los problemas reales y acostumbrando al público a noticias sensacionalistas, triviales o desdeñables. Una empresa de comunicación que tan solo busca el beneficio y olvida el interés público no está a la altura de lo que cabe esperar de unos medios de comunicación democráticos. En general, hay que reconocer que con demasiada frecuencia el sistema de intereses y beneficios se impone a la sociedad civil.

⁶³ Observación general N° 25 del Comité de Derechos Humanos, párr. 4; Observación general N° 34 del Comité de Derechos Humanos, párr. 49. Alfred de Zayas y Áurea Roldán Martín, "Freedom of Opinion and Freedom of Expression: Some Reflections on General Comment N° 34 of the UN Human Rights Committee" en *Netherlands International Law Review*, 2012, págs. 425 a 454.

41. No es posible conseguir un orden internacional democrático y equitativo mientras la sociedad civil carezca de mecanismos para efectuar cambios, por ejemplo, obligar democráticamente a cambiar prioridades: menos gastos militares y más desarme general, menos vigilancia de los ciudadanos y más lucha contra la corrupción y la delincuencia, menos "medidas de austeridad" y más justicia social.

V. Buenas prácticas

42. El Experto independiente acoge con satisfacción varias medidas legislativas aprobadas por numerosos Estados con el fin de fomentar la participación y anima a esos Estados a ponerlas en práctica.

43. Entre las buenas prácticas, el Experto independiente celebra la ratificación por los Estados del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su entrada en vigor el 5 de mayo de 2013, así como la ratificación de la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza⁶⁴, que entró en vigor el 15 de febrero de 2012. Alienta a llevar a cabo nuevas ratificaciones. Recuerda asimismo la entrada en vigor el 3 de mayo de 2008 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, según la cual los Estados partes se comprometen a "asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos..."⁶⁵. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está estableciendo ya importante jurisprudencia por medio de sus observaciones finales y el examen de casos individuales mediante el procedimiento previsto en el Protocolo Facultativo⁶⁶.

44. Varias iniciativas tienen por objeto promover un orden internacional democrático y equitativo estableciendo un examen judicial y constitucional, así como mecanismos de ejecución, en particular la propuesta del Gobierno de Túnez de establecer un tribunal constitucional internacional⁶⁷. Las propuestas para establecer un tribunal mundial de derechos humanos han sido apoyadas por la Iniciativa suiza para conmemorar el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos⁶⁸, la Comisión Internacional de Juristas y la Asociación de la Carta Internacional de Derechos Humanos⁶⁹. La Iniciativa de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas⁷⁰ y el Foro de partes interesadas en un futuro sostenible, cuya finalidad era la creación de un tribunal internacional para el medio ambiente⁷¹, fueron examinados en la Conferencia de Río+20.

⁶⁴ Véase: http://www.ipu.org/idd-E/afr_charter.pdf.

⁶⁵ Art. 29, <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>.

⁶⁶ Véase: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx>.

⁶⁷ Comité *ad hoc* pour la Création d'une Cour Constitutionnelle Internationale, *Project de Création d'une Cour Constitutionnelle Internationale*, Túnez 2013.

⁶⁸ Véase: <http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf>; véase también Julia Kozma y Manfred Nowak, "A World Court of Human Rights, Consolidated Draft Statute and Commentary", mayo de 2010, <http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/Professors/Scheinin/ConsolidatedWorldCourtStatute.pdf>.

⁶⁹ A/HRC/19/NGO/124, <http://www.internationalbillofrights.org/>.

⁷⁰ Joost Pauwelyn, "A World Environment Court", *International Environmental Governance (Gaps and Weaknesses/Proposals for Reform) Working Paper*, Tokyo, UNU-IAS, 2002. Véanse Ellen Hey, *Reflections on an Int'l Environmental Court*, 2000; Ole Pedersen, *An International Environmental Court*, Oxford 2012.

⁷¹ Véase: <http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=400&nr=222&menu=45> y http://effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/InternationalCourtForTheEnvironment_StephenHockmanQC_Effectius_Newsletter14.21260322.pdf.

45. Son encomiables los progresos realizados en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio así como los esfuerzos que se están desplegando para que tenga éxito la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de enero de 2013, sobre el tema "Por la justicia social, la solidaridad internacional y la soberanía de los pueblos", rechazó la comercialización de la naturaleza y la vida y culminó con la aprobación de la *Declaración de Santiago de Chile*.

46. El Experto independiente acoge con satisfacción el Comunicado de Quito de la Unión Interparlamentaria, aprobado en su 128ª Asamblea el 27 de marzo de 2013, en el que se estipula que "las políticas de bienestar exigen que *todos* los ciudadanos, y en particular los grupos vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los pobres, participen en la toma de decisiones. Poder participar en las decisiones que afectan a nuestras vidas y al contexto social y ambiental que nos rodea es de por sí un aspecto del bienestar. Viceversa, el bienestar también es necesario para que los ciudadanos participen efectivamente en la gestión de los asuntos públicos. La participación, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen a su vez pilares fundamentales de la democracia y del modo en que la democracia se aplica al funcionamiento del gobierno a todos los niveles —mundial, nacional y local— y en respuesta a las necesidades de los ciudadanos"⁷². Todos los parlamentos del mundo deberían operar de acuerdo con esa declaración.

47. Las iniciativas públicas y los referendos en pro del cambio democrático son merecedores de aplauso, por ejemplo, el *referendum* suizo sobre el sueldo de los ejecutivos de 3 de marzo de 2013, con el que pretendía conseguirse una mayor equidad en el plano nacional. He aquí un ejemplo de democracia directa en acción⁷³.

48. El Experto independiente acoge con satisfacción el hecho de que la sociedad civil abunda cada vez más en nuevas iniciativas. Un ejemplo de iniciativa de la sociedad civil que ha alcanzado una dimensión universal, y ha dado lugar a la aprobación de la *Declaración de Santiago de Compostela*⁷⁴ de 10 de diciembre de 2010, y la *Declaración de Oswiecim*⁷⁵ de 16 de mayo de 2013, y a la celebración de seminarios en todo el mundo⁷⁶, es la Declaración sobre el derecho a la paz. La participación mundial en este movimiento ha hecho que el imperativo de la paz figure en la agenda del Consejo de Derechos Humanos⁷⁷ y su Comité Asesor⁷⁸, y sin duda contribuirá a que se tenga cada vez más conciencia del valor fundamental de la paz como condición para un orden mundial justo y sostenible.

49. Durante muchos decenios se ha estado debatiendo la idea de una asamblea parlamentaria mundial⁷⁹ o de una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas. La idea consiste en paliar los déficits democráticos dejando oír la voz de la opinión pública mundial e incluyendo a los ciudadanos en la toma de decisiones mundiales a través de sus representantes elegidos. Dicha asamblea podría establecerse mediante votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud del Artículo 22 de la Carta de las

⁷² Véase: <http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm>.

⁷³ Véase: http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_1205403530_text.

⁷⁴ Véase: <http://www.aedidh.org/?q=node/1292>.

⁷⁵ Véase: <http://www.aedidh.org/?q=node/2191>.

⁷⁶ A/HRC/14/38. Véase http://www2.ohchr.org/english/issues/rule_of_law/workshop/.

⁷⁷ Véase: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RightPeace/Pages/WGDraftUNDeclarationontheRighttoPeace.aspx>; informe del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz, A/HRC/WG.13/1/2.

⁷⁸ Véanse: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToPeace.aspx>; y http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee/docs/session6/A.HRC.AC.6.CRP.3_en.pdf.

⁷⁹ Joseph Schwartzberg, *Creating a World Parliamentary Assembly*, Committee for a Democratic United Nations, Berlin, 2012. Richard Falk y Andrew Strauss, "Toward Global Parliament", *Foreign Affairs*, 2001, <http://ssrn.com/abstract=1130417>; *A Global Parliament*, 2011.

Naciones Unidas o bien mediante un nuevo tratado internacional entre los gobiernos, seguido de un acuerdo que la vincularía a las Naciones Unidas. Ninguno de esos mecanismos requiere la reforma de la Carta. El ex Secretario General de las Naciones Unidas Boutros Boutros-Ghali ha sido uno de los promotores de esa asamblea. En un comentario publicado en OpenDemocracy, Boutros-Ghali justificó la creación de una asamblea parlamentaria en las Naciones Unidas. A fin de resolver las crisis mundiales de manera más eficaz "es preciso establecer una conexión democrática directa entre los ciudadanos del mundo y la gobernanza mundial". Expresó también su satisfacción por la expansión de la democracia a nivel nacional en todo el mundo y observó que los países emergentes participan cada vez más en las deliberaciones intergubernamentales mundiales. Señaló asimismo que "se ignora casi por completo una tercera dimensión de la democratización: el desarrollo de la democracia mundial más allá de los Estados"⁸⁰. Johan Galtung, fundador del Instituto de Investigaciones sobre la Paz de Oslo, escribió lo siguiente: "Para quien cree en la democracia, o sea el gobierno basado en el consentimiento de los gobernados, la democracia mundial es una necesidad. Unas Naciones Unidas democráticas con una asamblea parlamentaria mundial en constante evolución son el camino a seguir"⁸¹. De hecho, si la Asamblea General representara a los pueblos además de los Estados, las decisiones mundiales tendrían mayor legitimidad gracias a las aportaciones y la participación de los ciudadanos.

50. Otras iniciativas de la sociedad civil merecedoras de apoyo son: la Declaración sobre la Libertad Digital⁸² de 2012 del PEN Internacional; el *Appel de Blois*⁸³ de 2008, lanzado por Liberté Pour l'Histoire; la *Declaración Universal para el Bien Común de la Humanidad*⁸⁴ del World Forum of Alternative, de 15 de marzo de 2013⁸⁵; y la *Declaración de París* de la Asociación Internacional del Juristas Demócratas, de 25 de mayo de 2013⁸⁶.

⁸⁰ Véase: <http://en.unpacampaign.org/news/379.php>; en *Creating a World Parliamentary Assembly*, Joseph Schwartzberg escribe lo siguiente: "Nuestro mundo cada vez más interdependiente ya no puede funcionar sin un sistema de las Naciones Unidas eficaz. Por diversas razones, sobre todo debidas a mentalidades anticuadas y a las dudosas prácticas diplomáticas de un mundo que aún se guía sobre todo por la *Realpolitik*, una gran parte de la familia humana ha perdido la fe en las Naciones Unidas... Una asamblea parlamentaria mundial democráticamente constituida contribuiría a corregir estas deficiencias y a promover una gobernanza más legítima, transparente, representativa, responsable y reactiva a nivel nacional y también a nivel internacional. Dar a las diversas corrientes de la humanidad, en cuyo interés se fundaron las Naciones Unidas, una voz influyente en la adopción de las decisiones que van a condicionar su destino hará más para legitimar a la organización mundial que cualquier otra reforma imaginable" (pág. 96). Saul Mendlovitz y Barbara Walker (eds.), *A Reader on Second Assembly and Parliamentary Proposals*, Centre for UN Reform Education, Wayne, New Jersey, Estados Unidos, 2003. Véase también Dieter Heinrich, *The Case for a United Nations Parliamentary Assembly*, World Federalist Movement, Amsterdam 1992; y Andreas Bummel, *The Composition of a Parliamentary Assembly at the United Nations*, Berlin, 2010.

⁸¹ Citado en Schwartzberg, pág. 6.

⁸² Aprobada en el 78º Congreso anual del PEN celebrado en la República de Corea en 2012, <http://www.pen-international.org/pen-declaration-on-digital-freedom/>.

⁸³ Véanse los anexos, http://www.lph-asso.fr/index.php?Itemid=14&id=47&lang=fr&option=com_content&view=article.

⁸⁴ Véase: <http://www.especieenpeligro.cult.cu/index.php/debates-y-alternativas/articulos/1521-universal-declaration-for-the>.

⁸⁵ Véase: <http://www.forumdesalternatives.org/en/universal-declaration-for-the-common-good-of-humanity-project>.

⁸⁶ Véase: <http://www.iadllaw.org/>.

VI. Conclusiones y recomendaciones

51. La resolución N° 18/6 estableció un amplio mandato a fin de lograr la convergencia de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Se insta a cada país a que dé un paso adelante y examine los obstáculos que dificultan los procesos democráticos y la equidad y aplique medidas precisas que fomenten la participación de todas las personas que están bajo su jurisdicción. Para ello es preciso un cambio de paradigma y de mentalidad, buena voluntad y autocrítica. La autocomplacencia es siempre un obstáculo para el progreso.

52. Estaría bien poder informar de que los Estados y la sociedad civil están progresando en la promoción de una cultura de ideas democráticas, *sentimiento* democrático y comportamiento democrático. Lamentablemente, la mayoría de campos de la actividad humana parecen estar bloqueados dentro de su propia lógica y dinámica, en la que se invoca la democracia para legitimar el *statu quo*, pero se hace poco para dar vida a los conceptos de participación y consulta o a los valores fundamentales de las Naciones Unidas, como la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, el espíritu de la democracia pervive en las mentes de las mujeres y los hombres y paso a paso cada comunidad, Estado y región pueden invocarlo y remitirse a él. Esta cultura de la democracia debe tener un desarrollo autóctono y no puede exportarse ni imponerse desde arriba. Es crucial la convicción de que el gobierno debe servir al pueblo y de que sus poderes deben estar limitados por una constitución y por el estado de derecho. La pregunta de Juvenal *quis custodiet ipsos custodes* (¿quién guardará a los guardianes?) sigue siendo uno de los problemas centrales de la democracia, ya que el pueblo debe vigilar siempre el comportamiento constitucional de los dirigentes y procesarlos y destituirlos si incumplen sus obligaciones. Los tribunales constitucionales deben cumplir esta función y la sociedad civil debe solidarizarse con los defensores de los derechos humanos y los reveladores de irregularidades, quienes, lejos de ser poco patriotas, prestan un servicio democrático a sus países y al mundo en general.

53. Los "intereses vitales" de los Estados deben ajustarse a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, respetando la soberanía de los Estados y la libre determinación de los pueblos. El problema es que, aunque se habla de reformas, los intereses creados impiden ponerlas en práctica; aunque hay indignados y movimientos de protesta (*occupy*), no hay ningún mecanismo efectivo para convertir las protestas públicas en reformas concretas. Pronto todo vuelve a la normalidad y la opinión pública sigue siendo irrelevante. Dado que el acceso a la información, la libertad de expresión y los medios de comunicación son indispensables para llevar a cabo reformas, es fundamental conseguir la democratización de los medios de comunicación para ejerzan su función de vigilancia. Unos medios sin libertad, controlados por el Estado o en manos de intereses empresariales, socavan la democracia. Y si bien las campañas mediáticas pueden influir negativamente en las decisiones que se adoptan, los medios de comunicación responsables también pueden impulsar una agenda de derechos humanos mediante la información y la educación. Hay que tender puentes entre el poder institucionalizado y el pueblo. Repitémoslo una vez más: democracia significa participación. La "democracia formal" no es democracia.

A. Recomendaciones a los Estados

54. El Experto independiente recuerda el texto del artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a

que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos".

55. En cuanto a la participación a nivel internacional:

a) Los Estados deberían cooperar para la reforma del Consejo de Seguridad, a fin de ampliar su composición y conceder a todos los Estados, grandes y pequeños, ricos y pobres, una mayor participación democrática en las decisiones mundiales. En el contexto dinámico de un mundo en constante evolución, llevar a cabo reformas regularmente es condición necesaria para la estabilidad.

b) En vista de que el Consejo de Seguridad está bloqueado por el uso o la amenaza de uso del veto por algunos de los cinco Estados que lo poseen, los Estados miembros y los observadores de la Asamblea General deberían revitalizar esta Asamblea, para que en lo sucesivo desempeñe un mayor papel en la adopción de decisiones internacionales. Por ejemplo, la Asamblea General debería instar a los Estados a imponer sanciones económicas a aquellos Estados que se nieguen a acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos. La Asamblea General debería también remitir cuestiones jurídicas a la Corte Internacional de Justicia para recabar su opinión consultiva en cuestiones relacionadas con la democracia, la participación, la distribución equitativa de los recursos mundiales, el patrimonio común de la humanidad y la libre determinación de los pueblos.

c) Los Estados deberían garantizar la participación más democrática y equitativa de todos los Estados en las instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁸⁷, por ejemplo poniéndolas bajo la autoridad de las Naciones Unidas y subordinándolas a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de conformidad con los Artículos 57 y 63 de la Carta. Además, para ser miembro de la OMC podría ponerse la condición de aceptar una carta internacional de derechos humanos, de la misma manera, por ejemplo, que la entrada en el Consejo de Europa depende de la aceptación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

d) Los Estados deberían aplicar el derecho internacional de manera uniforme y abandonar los planteamientos excesivamente "positivistas" y los intentos de eludir las obligaciones estipuladas en los tratados de derechos humanos. No hay "agujeros negros jurídicos" en los derechos humanos, puesto que todos los seres humanos deben gozar de todos los derechos que se derivan de la dignidad humana.

e) Los Estados deberían ratificar los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos, los mecanismos correspondientes de presentación de quejas, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, incluido el N° 169. Los Estados deberían permitir la participación plena de las personas, la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos en la preparación de los informes dirigidos a los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas y al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo.

f) Los Estados deberían practicar lo que predicán y verificar, de buena fe, si sus acciones se ajustan a los propósitos y principios de las Naciones Unidas,

⁸⁷ Martin Khor, *Implications of Some WTO Rules on the Realization of the MDGs*, Penang, Malasia, 2005; M. Khor, *The Impact of Trade Liberalism on Agriculture in Developing Countries*, 2008; Yilmaz Akyüz, *The WTO Negotiations on Industrial Tariffs: What is at Stake for Developing Countries*, 2005.

sabedores de que el fin no justifica los medios y que el derecho internacional es por definición universal y no debe aplicarse *à la carte*.

g) Lo que es más importante, los Estados deben cumplir de manera rigurosa las obligaciones estipuladas en el Artículo 2, párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas, que insta a todos los Estados a resolver todas las controversias por medios pacíficos, y en el Artículo 2, párrafo 4, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza⁸⁸. Los Estados deben negociar de buena fe y abstenerse de toda intimidación, de trazar "líneas rojas" o de formular "ultimátums". Los Estados deberían reconocer en sus constituciones y estatutos el derecho y el deber de la paz y la solidaridad.

h) Los Estados deberían dejar de recurrir a medidas unilaterales, en particular cuando tales medidas obstaculizan la cooperación internacional y crean tensiones innecesarias en la comunidad internacional; en particular, los Estados deberían abstenerse de toda injerencia directa o indirecta en otros países.

i) Los Estados deberían imponer controles a los mercados financieros y de productos básicos, prohibir los "sistemas bancarios paralelos" y regular la especulación. Debería organizarse una conferencia internacional para resolver el problema de la dominación financiera.

56. En cuanto a la participación a nivel nacional:

a) Los Estados deberían reforzar el estado de derecho y aplicar el principio de la separación de los poderes. En particular, los Estados deberían adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para hacer más efectiva la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, en particular permitiendo una democracia más directa por medio de instrumentos como la iniciativa popular, los referendos, el procesamiento y la destitución de dirigentes políticos. Además es preciso evaluar no solo las leyes sino también las prácticas actuales. Para dar más poder a la ciudadanía se requieren programas de enseñanza de los derechos humanos, incluido el derecho a la paz.

b) Los Estados deberían adoptar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para hacer efectiva la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deberían aplicar sus artículos 2, 19, 21, 22 y 25, de acuerdo con el principio expresado en la opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional, "según la cual un Estado que haya contraído obligaciones internacionales válidas estará obligado a introducir en su legislación las modificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas"⁸⁹.

c) Se invita a los Estados a ir más allá de lo dispuesto en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para garantizar el pluralismo en las elecciones y promover las consultas con las partes interesadas. En particular, los Estados deberían aplicar las recomendaciones relativas a la participación y la consulta que figuran en las observaciones generales pertinentes de los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas.

d) Deberían facilitarse los sistemas electorales con múltiples partidos y la creación de partidos políticos que representen una amplia diversidad de puntos de vista. Los Estados deberían revisar sus leyes relativas a la creación y prohibición de partidos políticos. Los sistemas de partido único adolecen de un déficit democrático

⁸⁸ Antonio Cassese (ed.): *Realizing Utopia-the Future of International Law*, Oxford 2012, "A Plea for a Global Community Grounded in a Core of Human Rights", y "For an Enhanced Role of *Jus Cogens*".

⁸⁹ Opinión consultiva acerca del *Exchange of Greek and Turkish Populations Case*, http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1925.02.21_greek_turkish.htm.

obvio y si solo se permite el funcionamiento de un partido político, debe hacerse lo posible por facilitar y alentar la participación pública en la formulación de las políticas y la posibilidad de expresar diversos puntos de vista dentro del partido.

e) Los Estados deberían garantizar el acceso a la información pública⁹⁰ y derogar las leyes incompatibles con los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular las leyes sobre la blasfemia y la memoria histórica y todas las leyes que obstaculicen un debate abierto sobre acontecimientos políticos e históricos. Los Estados deberían abstenerse de utilizar indebidamente la legislación antiterrorista para intimidar y suprimir a los disidentes y de este modo restringir la participación en el proceso democrático⁹¹. Los Estados deberían garantizar la libertad de expresión en línea y no ejercer ninguna censura excepto por razones de salud y moral.

f) Los Estados nunca deberían tomar represalias contra los defensores de los derechos humanos y sí derogar las leyes que dificulten el ejercicio del derecho de reunión pacífica en los ámbitos público y privado, no sancionar con multas desproporcionadas o penas de cárcel a los manifestantes, ni restringir el derecho de asociación y negociación colectiva.

g) Los Estados deberían garantizar la rendición de cuentas de todos los órganos estatales y revitalizar los parlamentos elegidos, de manera que el poder ejecutivo no pueda eludir los controles democráticos mediante directivas o decretos no sujetos a trámite parlamentario.

h) Los Estados deben tener presentes los considerables riesgos que entraña la privatización de servicios públicos esenciales. Los servicios privatizados deben cumplir las normas de derechos humanos, como por ejemplo, la no discriminación, la accesibilidad, la asequibilidad, la calidad y la idoneidad, teniendo en cuenta que, cuando no es el Estado el encargado de prestar los servicios, es aún mayor su obligación de proteger a los ciudadanos.

i) Los Estados deberían garantizar el acceso a una información veraz y fidedigna por parte de la población, alentar el pluralismo y la democratización de los medios de comunicación, tanto por vía electrónica como por otras vías, si es necesario mediante la aprobación de leyes antitrust para fragmentar los cárteles y los conglomerados de medios de comunicación, que restringen la diversidad de opiniones y los debates indispensables en el proceso democrático.

j) Los Estados deberían construir espacios y crear condiciones propicias para el libre debate y la expresión de opiniones diversas sobre cuestiones de interés público.

B. Recomendaciones al Consejo

57. El Experto independiente hace las recomendaciones siguientes:

a) El Experto independiente acoge con satisfacción los progresos realizados por el Consejo de Derechos Humanos en el examen del proyecto de declaración sobre

⁹⁰ Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales de 2009; proyecto del ley modelo para los Estados miembros de la Unión Africana sobre el acceso a la información; Ley modelo de la OEA sobre el acceso a la información pública.

⁹¹ How fusion centers spied on Occupy Wall Street, <http://ufppc.org/us-a-world-news-mainmenu-35/11479/>; véase también Sheldon Wolin, *Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism*, 2008.

el derecho a la paz preparado por el Comité Asesor, y alienta al Consejo a proseguir sus deliberaciones por tratarse de una medida constructiva para llegar a un orden internacional democrático y equitativo. La declaración debería someterse a la Asamblea General para su aprobación.

b) El Experto independiente observa que la libre determinación era un tema permanente en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta que la libre determinación es uno de los pilares de la Carta y que hay muchos pueblos indígenas, minorías, pueblos no representados y pueblos que viven bajo la ocupación que no la han alcanzado, el Consejo debería reanudar el examen de la cuestión de la libre determinación como parte de los temas 3 y 4 de su agenda.

c) El Consejo debería considerar la posibilidad de celebrar un seminario sobre la libre determinación y la participación auténtica. Todo déficit de democracia es en último término un déficit de libre determinación.

d) El Consejo debería considerar la posibilidad de encomendar a su Comité Asesor: i) una actualización del estudio sobre los tratados entre los Estados y las poblaciones indígenas llevado a cabo en 1999 por la Subcomisión⁹²; ii) la preparación de una estrategia para revitalizar el informe Cardoso de 2004 sobre la relación entre las Naciones Unidas y la sociedad civil (A/58/817), a fin de realzar el papel de la sociedad civil en la labor del Consejo, y ofrecer a las ONG al menos el mismo tiempo y las mismas oportunidades de participar en sus trabajos que tenían en la anterior Comisión de Derechos Humanos; iii) un estudio sobre cómo la asamblea parlamentaria mundial podría promover una participación auténtica; iv) un estudio sobre la manera de aplicar mejor sus propias resoluciones, las recomendaciones de los EPU, así como las decisiones y los puntos de vista de los órganos creados en virtud de tratados, en particular asegurándose de que los titulares de mandatos de los procedimientos especiales puedan prestar servicios consultivos y asistencia técnica a los Estados para la redacción de las leyes pertinentes; y v) un estudio sobre el valor añadido que supondría la creación de un tribunal mundial de derechos humanos.

e) El Consejo debería recomendar a la Asamblea General la aprobación de una resolución que racionalizara el procedimiento para reconocer a las ONG como entidades consultivas a fin de eliminar la politización y dar a la sociedad civil mayor acceso al Consejo.

f) El Consejo debería considerar la posibilidad de recomendar a la Asamblea General que plantee cuestiones jurídicas concretas en lo que respecta a la libre determinación, la guerra, la paz, la democracia, la responsabilidad social de las empresas y la condonación de la deuda a la Corte Internacional de Justicia por sus opiniones consultivas.

C. Recomendaciones a la sociedad civil y a las instituciones nacionales de derechos humanos

58. El artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula lo siguiente: "Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". El Experto independiente es consciente de que en muchos países la sociedad civil dispone de escaso margen para trabajar y formular demandas legítimas. Con todo, alienta a la sociedad civil a:

⁹² Véase E/CN.4/Sub.2/1999/20, <http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/696c51cf6f20b8bc802567c4003793ec>.

a) Asumir este reto como deber cívico y reclamar sus derechos, exigir consultas y una participación efectiva en la adopción de decisiones, encuestas de opinión fiables y referendos considerados como un derecho, en particular sobre cuestiones como las medidas de vigilancia ordenadas por el Estado, que afectan a los derechos civiles y políticos, y sobre cuestiones relacionadas con la regresión⁹³ en los servicios sociales, incluidas las "medidas de austeridad" la privatización de funciones públicas esenciales, etc. La sociedad civil debería aprovechar las nuevas tecnologías digitales y los medios de comunicación social para revitalizar la democracia, por ejemplo pidiendo servicios sociales y la regulación de los mercados financieros, y denunciando la propaganda de guerra y las violaciones de los derechos humanos.

b) Invocar los procedimientos de las Naciones Unidas, incluido el nuevo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La sociedad civil debería pedir a sus representantes que recurrieran a los tribunales nacionales e internacionales y colaboraran con ellos, incluidas las instancias nacionales de examen y solución de controversias, y los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas.

c) Ofrecer resistencia pacífica a la violencia estructural impuesta por los gobiernos y las empresas. Debería invocarse el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación a fin de restablecer la participación democrática⁹⁴.

d) Insistir en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y denunciar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por sus gobiernos. En particular, la sociedad civil debería investigar las revelaciones de irregularidades y adoptar medidas al respecto, cuando se vea claramente que gobiernos democráticamente elegidos han actuado o están actuando *ultra vires* y en contravención del derecho internacional, incluidos los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, y los convenios de Ginebra de 1949, así como los protocolos adicionales de 1977. La sociedad civil debería rechazar la impunidad por los delitos cometidos por sus dirigentes políticos y por los delitos de guante blanco de los financieros y magnates empresariales.

e) Hacer un mayor uso de la democracia directa, si es posible, o pedir que sus representantes preparen, examinen y aprueben leyes apropiadas para facilitar las iniciativas públicas, los referendos, el procesamiento y la destitución de dirigentes políticos. La sociedad civil debe pedir la celebración de frecuentes encuestas de opinión a nivel internacional y nacional. Es crucial el derecho a elegir las políticas y no limitarse tan solo a votar por un determinado candidato, cuando la posibilidad de influir en la presentación de candidatos es más teórica que práctica.

f) Examinar las ventajas e inconvenientes de establecer, como órgano consultivo, una asamblea parlamentaria mundial de representantes directamente elegidos, que podría funcionar dentro o fuera de las Naciones Unidas.

g) Reivindicar el derecho a tener acceso a información veraz y fidedigna e insistir en que los gobiernos apliquen los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y practiquen la transparencia. La sociedad civil debería pedir una reforma de los medios de comunicación para garantizar el pluralismo y el respeto de la función de control y vigilancia que debe ejercer el periodismo. Deben

⁹³ En el artículo 2, párr. 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece el principio de no regresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce también la "obligación de progresividad" en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

⁹⁴ Stéphane Hessel, *Indignez-Vous*, 2011. Norman Finkelstein, *Gandhi*, 2012.

denunciarse las informaciones tendenciosas y la manipulación. En particular, debería facilitarse la participación y la interacción desde la base, en particular en la asignación de frecuencias de ondas, que pertenecen al pueblo, no a las empresas multinacionales o a los magnates de los medios de comunicación. Hay que reconsiderar los vínculos existentes entre noticias y publicidad, ya que la opinión pública tiene un derecho democrático a la información veraz y a la diversidad de interpretaciones. Debe pedirse que los servicios de noticias sean neutrales y que haya una separación entre noticias y comentarios. Cuando la difusión de las noticias depende de la publicidad, la objetividad está en peligro.

h) Denunciar la difusión de propaganda de guerra a través de los medios de comunicación en contravención del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la apología de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Además, la sociedad civil debería pedir que se aprobara una legislación antitrust eficaz o que se aplicaran las leyes antitrust vigentes a fin de poder fragmentar los conglomerados de medios de comunicación y los monopolios que impiden el pluralismo. Debería pedir la participación pública en la asignación y regulación de las frecuencias de ondas, que deben considerarse de dominio público.

i) Pedir que las empresas observen los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos y que los gobiernos apliquen el "marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar".

59. Las instituciones nacionales de derechos humanos que trabajan de acuerdo con los Principios de París deberían promover y facilitar la participación pública en los asuntos públicos⁹⁵. Deberían denunciar los procesos pseudodemocráticos e insistir en la aplicación uniforme del derecho internacional. Deberían aconsejar a los gobiernos acerca de las implicaciones que los proyectos de ley pueden tener para los derechos humanos y vigilar si las medidas que se adoptan son constitucionales.

60. El Experto independiente reconoce que se han realizado muchos progresos desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Ahora se dispone de normas y mecanismos. Pero es preciso admitir que la aplicación sigue siendo insuficiente. Conseguir un orden internacional más democrático y equitativo no es ninguna utopía. Es y será posible cuando las personas, la sociedad civil, los Estados y las Naciones Unidas trabajen juntos para que esta aspiración se convierta en realidad en nuestro tiempo. Es nuestra obligación lograr que los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas no se queden en meras promesas y puedan dar frutos para las generaciones venideras.

⁹⁵ Danish Institute for Human Rights, *NHRIs and Public Participation*, documento temático, abril de 2013.

Anexo

[Inglés únicamente]

Excerpts or full text of relevant documents

I. Universal Declaration on Democracy, Declaration adopted without a vote by the Inter-Parliamentary Council at its 161st session, Cairo, 16 September 1997 (excerpts)¹

1. Democracy is a universally recognised ideal as well as a goal, which is based on common values shared by peoples throughout the world community irrespective of cultural, political, social and economic differences. It is thus a basic right of citizenship to be exercised under conditions of freedom, equality, transparency and responsibility, with due respect for the plurality of views, and in the interest of the polity.

2. Democracy is both an ideal to be pursued and a mode of government to be applied according to modalities which reflect the diversity of experiences and cultural particularities without derogating from internationally recognised principles, norms and standards. It is thus a constantly perfected and always perfectible state or condition whose progress will depend upon a variety of political, social, economic, and cultural factors.

3. As an ideal, democracy aims essentially to preserve and promote the dignity and fundamental rights of the individual, to achieve social justice, foster the economic and social development of the community, strengthen the cohesion of society and enhance national tranquillity, as well as to create a climate that is favourable for international peace. As a form of government, democracy is the best way of achieving these objectives; it is also the only political system that has the capacity for self-correction.

4. The achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society in which they work in equality and complementarity, drawing mutual enrichment from their differences.

5. A state of democracy ensures that the processes by which power is acceded to, wielded and alternates allow for free political competition and are the product of open, free and non-discriminatory participation by the people, exercised in accordance with the rule of law, in both letter and spirit.

6. Democracy is inseparable from the rights set forth in the international instruments recalled in the preamble. These rights must therefore be applied effectively and their proper exercise must be matched with individual and collective responsibilities.

16. Individual participation in democratic processes and public life at all levels must be regulated fairly and impartially and must avoid any discrimination, as well as the risk of intimidation by State and non-State actors.

17. Judicial institutions and independent, impartial and effective oversight mechanisms are the guarantors for the rule of law on which democracy is founded. In order for these institutions and mechanisms fully to ensure respect for the rules, improve the fairness of the processes and redress injustices, there must be access by all to administrative and judicial remedies on the basis of equality as well as respect for administrative and judicial decisions

¹ <http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm#Reserve>.

both by the organs of the State and representatives of public authority and by each member of society.

22. The institutions and processes of democracy must accommodate the participation of all people in homogeneous as well as heterogeneous societies in order to safeguard diversity, pluralism and the right to be different in a climate of tolerance.

23. Democratic institutions and processes must also foster decentralised local and regional government and administration, which is a right and a necessity, and which makes it possible to broaden the base of public participation.

24. Democracy must also be recognised as an international principle, applicable to international organisations and to States in their international relations. The principle of international democracy does not only mean equal or fair representation of States; it also extends to the economic rights and duties of States.

25. The principles of democracy must be applied to the international management of issues of global interest and the common heritage of humankind, in particular the human environment.

26. To preserve international democracy, States must ensure that their conduct conforms to international law, refrain from the use or threat of force and from any conduct that endangers or violates the sovereignty and political or territorial integrity of other States, and take steps to resolve their differences by peaceful means.

27. A democracy should support democratic principles in international relations. In that respect, democracies must refrain from undemocratic conduct, express solidarity with democratic governments and non-State actors like non-governmental organisations which work for democracy and human rights, and extend solidarity to those who are victims of human rights violations at the hands of undemocratic régimes. In order to strengthen international criminal justice, democracies must reject impunity for international crimes and serious violations of fundamental human rights and support the establishment of a permanent international criminal court.

II. Inter-Parliamentary Union Quito Communiqué, Adopted by the 128th IPU Assembly, Quito, 27 March 2013 (excerpts)²

By definition, well-being policies require *all* citizens, and particularly vulnerable groups such as women, youth, indigenous peoples and the poor, to participate in decision-making. Being able to participate in the decisions that affect our lives and the social and environmental context around us is in itself a key dimension of well-being. Inversely, well-being is also necessary for citizens to participate effectively in the management of public affairs. Participation and its attendants of transparency and accountability are in turn key pillars of democracy and of the way democracy applies to the functioning of government at all levels - global, national and local - and in response to citizens' needs.

Participation, transparency and accountability constitute the core of *democratic governance*, which is an end in itself and an enabler of sustainable development. There can be no true prosperity without respect for the universal values of democracy, the rule of law and human rights. Democratic governance should therefore be a stand-alone goal among the new Sustainable Development Goals, as well as a dimension of other goals that will be part of the future development framework. This is further supported by the results of a survey of hundreds of members carried out during the Assembly.

² <http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm>

To help steer sustainable development on a new course, a rebalancing of the role of the market and that of government is called for. Effective ways to help reconcile market needs with social imperatives include the development of private-public partnerships, community-based enterprises and other forms of cooperative models. Government intervention to guarantee the rights of the very poor and to safeguard the natural resource base will also be needed. The interdependent challenges of sustainable development require a concerted approach that only governments can initiate and help implement.

To this end, it will be more important than ever for parliaments to assert their legitimate place in the decision-making process at the national and international levels. The institution of parliament is pivotal to the entire architecture of democratic governance and needs to be strengthened virtually everywhere in the world, with greater oversight capacities and legislative authority. More specifically, stronger parliaments will have to play a central role in the implementation of the future Sustainable Development Goals. This will include ensuring that development policies and plans are drawn up through participatory and inclusive processes, and with regular progress reports submitted to parliament for review.

This debate should continue in national parliaments as a way of engaging them in the global consultations foreseen in the Rio outcome document, aptly called *The Future We Want*.

III. Rio Declaration on Environment and Development, 12 August 1992 (excerpts)³

The United Nations Conference on Environment and Development,

Having met at Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992,

Reaffirming the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, and seeking to build upon it,

With the goal of establishing a new and equitable global partnership through the creation of new levels of cooperation among States, key sectors of societies and people,

Working towards international agreements which respect the interests of all and protect the integrity of the global environmental and developmental system,

Recognizing the integral and interdependent nature of the Earth, our home,

Proclaims that:

Principle 10

Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.

Principle 20

Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustainable development.

³ <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>

Principle 22

Indigenous people and their communities and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.

IV. ILO Declaration on Social Justice, 10 June 2008 (excerpts)⁴*Scope and principles*

The Conference recognizes and declares that:

A. In the context of accelerating change, the commitments and efforts of Members and the Organization to implement the ILO's constitutional mandate, including through international labour standards, and to place full and productive employment and decent work at the centre of economic and social policies, should be based on the four equally important strategic objectives of the ILO, through which the Decent Work Agenda is expressed and which can be summarized as follows:

- (i) promoting employment by creating a sustainable institutional and economic environment in which:
 - individuals can develop and update the necessary capacities and skills they need to enable them to be productively occupied for their personal fulfilment and the common well-being;
 - all enterprises, public or private, are sustainable to enable growth and the generation of greater employment and income opportunities and prospects for all; and societies can achieve their goals of economic development, good living standards and social progress;
- (ii) developing and enhancing measures of social protection – social security and labour protection – which are sustainable and adapted to national circumstances, including:
 - the extension of social security to all, including measures to provide basic income to all in need of such protection, and adapting its scope and coverage to meet the new needs and uncertainties generated by the rapidity of technological, societal, demographic and economic changes;
 - healthy and safe working conditions; and
 - policies in regard to wages and earnings, hours and other conditions of work, designed to ensure a just share of the fruits of progress to all and a minimum living wage to all employed and in need of such protection;
- (iii) promoting social dialogue and tripartism as the most appropriate methods for:
 - adapting the implementation of the strategic objectives to the needs and circumstances of each country;
 - translating economic development into social progress, and social progress into economic development;

⁴ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_094042.pdf

- facilitating consensus building on relevant national and international policies that impact on employment and decent work strategies and programmes; and making labour law and institutions effective, including in respect of the recognition of the employment relationship, the promotion of good industrial relations and the building of effective labour inspection systems; and
- (iv) respecting, promoting and realizing the fundamental principles and rights at work, which are of particular significance, as both rights and enabling conditions that are necessary for the full realization of all of the strategic objectives, noting:
 - that freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining are particularly important to enable the attainment of the four strategic objectives; and
 - that the violation of fundamental principles and rights at work cannot be invoked or otherwise used as a legitimate comparative advantage and that labour standards should not be used for protectionist trade purposes.

B. The four strategic objectives are inseparable, interrelated and mutually supportive. The failure to promote any one of them would harm progress towards the others. To optimize their impact, efforts to promote them should be part of an ILO global and integrated strategy for decent work. Gender equality and non-discrimination must be considered to be cross-cutting issues in the abovementioned strategic objectives.

C. How Members achieve the strategic objectives is a question that must be determined by each Member subject to its existing international obligations and the fundamental principles and rights at work with due regard, among others, to:

- (i) the national conditions and circumstances, and needs as well as priorities expressed by representative organizations of employers and workers;
- (ii) the interdependence, solidarity and cooperation among all Members of the ILO that are more pertinent than ever in the context of a global economy; and
- (iii) the principles and provisions of international labour standards.

Method of implementation

The Conference further recognizes that, in a globalized economy:

A. The implementation of Part I of this Declaration requires that the ILO effectively assist its Members in their efforts. To that end, the Organization should review and adapt its institutional practices to enhance governance and capacity building in order to make the best use of its human and financial resources and of the unique advantage of its tripartite structure and standards system, with a view to:

- (i) better understanding its Members' needs, with respect to each of the strategic objectives, as well as past ILO action to meet them in the framework of a recurring item on the agenda of the Conference, so as to:
 - determine how the ILO can more efficiently address these needs through coordinated use of all its means of action;
 - determine the necessary resources to address these needs and, if appropriate, to attract additional resources; and
 - guide the Governing Body and the Office in their responsibilities;
- (ii) strengthening and streamlining its technical cooperation and expert advice in order to:

- support and assist efforts by individual Members to make progress on a tripartite basis towards all the strategic objectives, through country programmes for decent work, where appropriate, and within the framework of the United Nations system; and
- help, wherever necessary, the institutional capacity of member States, as well as representative organizations of employers and workers, to facilitate meaningful and coherent social policy and sustainable development;

(iii) promoting shared knowledge and understanding of the synergies between the strategic objectives through empirical analysis and tripartite discussion of concrete experiences, with the voluntary cooperation of countries concerned, and with a view to informing Members' decision-making in relation to the opportunities and challenges of globalization;

(iv) upon request, providing assistance to Members who wish to promote strategic objectives jointly within the framework of bilateral or multilateral agreements, subject to their compatibility with ILO obligations; and

(v) developing new partnerships with non-state entities and economic actors, such as multinational enterprises and trade unions operating at the global sectoral level in order to enhance the effectiveness of ILO operational programmes and activities, enlist their support in any appropriate way, and otherwise promote the ILO strategic objectives. This will be done in consultation with representative national and international organizations of workers and employers.

B. At the same time, Members have a key responsibility to contribute, through their social and economic policy, to the realization of a global and integrated strategy for the implementation of the strategic objectives, which encompass the Decent Work Agenda outlined in Part I of this Declaration. Implementation of the Decent Work Agenda at national level will depend on national needs and priorities and it will be for member States, in consultation with the representative organizations of workers and employers, to determine how to discharge that responsibility. To that end, they may consider, among other steps:

- (i) the adoption of a national or regional strategy for decent work, or both, targeting a set of priorities for the integrated pursuit of the strategic objectives;
- (ii) the establishment of appropriate indicators or statistics, if necessary with the assistance of the ILO, to monitor and evaluate the progress made;
- (iii) the review of their situation as regards the ratification or implementation of ILO instruments with a view to achieving a progressively increasing coverage of each of the strategic objectives, with special emphasis on the instruments classified as core labour standards as well as those regarded as most significant from the viewpoint of governance covering tripartism, employment policy and labour inspection;
- (iv) the taking of appropriate steps for an adequate coordination between positions taken on behalf of the member State concerned in relevant international forums and any steps they may take under the present Declaration;
- (v) the promotion of sustainable enterprises;
- (vi) where appropriate, sharing national and regional good practice gained from the successful implementation of national or regional initiatives with a decent work element; and

(vii) the provision on a bilateral, regional or multilateral basis, in so far as their resources permit, of appropriate support to other Members' efforts to give effect to the principles and objectives referred to in this Declaration.

C. Other international and regional organizations with mandates in closely related fields can have an important contribution to make to the implementation of the integrated approach. The ILO should invite them to promote decent work, bearing in mind that each agency will have full control of its mandate. As trade and financial market policy both affect employment, it is the ILO's role to evaluate those employment effects to achieve its aim of placing employment at the heart of economic policies.

Final provisions

A. The Director-General of the International Labour Office will ensure that the present Declaration is communicated to all Members and, through them, to representative organizations of employers and workers, to international organizations with competence in related fields at the international and regional levels, and to such other entities as the Governing Body may identify. Governments, as well as employers' and workers' organizations at the national level, shall make the Declaration known in all relevant forums where they may participate or be represented, or otherwise disseminate it to any other entities that may be concerned.

B. The Governing Body and the Director-General of the International Labour Office will have the responsibility for establishing appropriate modalities for the expeditious implementation of Part II of this Declaration.

V. African Charter on democracy, elections and governance, 30 January 2007 (excerpts)⁵

Preamble

We, the Member States of the African Union (AU);

Inspired by the objectives and principles enshrined in the Constitutive Act of the African Union, particularly Articles 3 and 4, which emphasise the significance of good governance, popular participation, the rule of law and human rights;

Recognising the contributions of the African Union and Regional Economic Communities to the promotion, nurturing, strengthening and consolidation of democracy and governance;

Reaffirming our collective will to work relentlessly to deepen and consolidate the rule of law, peace, security and development in our countries;

Chapter 2

Objectives

Article 2

The objectives of this Charter are to:

1. Promote adherence, by each State Party, to the universal values and principles of democracy and respect for human rights;

⁵ <http://www.achpr.org/instruments/charter-democracy/>

2. Promote and enhance adherence to the principle of the rule of law premised upon the respect for, and the supremacy of, the Constitution and constitutional order in the political arrangements of the State Parties;
3. Promote the holding of regular free and fair elections to institutionalize legitimate authority of representative government as well as democratic change of governments;
4. Prohibit, reject and condemn unconstitutional change of government in any Member State as a serious threat to stability, peace, security and development;
5. Promote and protect the independence of the judiciary;
6. Nurture, support and consolidate good governance by promoting democratic culture and practice, building and strengthening governance institutions and inculcating political pluralism and tolerance;
7. Encourage effective coordination and harmonization of governance policies amongst State Parties with the aim of promoting regional and continental integration;
8. Promote State Parties' sustainable development and human security;
9. Promote the fight against corruption in conformity with the provisions of the AU Convention on Preventing and Combating Corruption adopted in Maputo, Mozambique in July 2003;
10. Promote the establishment of the necessary conditions to foster citizen participation, transparency, access to information, freedom of the press and accountability in the management of public affairs;
11. Promote gender balance and equality in the governance and development processes;
12. Enhance cooperation between the Union, Regional Economic Communities and the International Community on democracy, elections and governance; and
13. Promote best practices in the management of elections for purposes of political stability and good governance.

Article 3

State Parties shall implement this Charter in accordance with the following principles:

1. Respect for human rights and democratic principles;
2. Access to and exercise of state power in accordance with the constitution of the State Party and the principle of the rule of law;
3. Promotion of a system of government that is representative;
4. Holding of regular, transparent, free and fair elections;
5. Separation of powers;
6. Promotion of gender equality in public and private institutions;
7. Effective participation of citizens in democratic and development processes and in governance of public affairs;
8. Transparency and fairness in the management of public affairs;
9. Condemnation and rejection of acts of corruption, related offenses and impunity;

10. Condemnation and total rejection of unconstitutional changes of government;

11. Strengthening political pluralism and recognising the role, rights and responsibilities of legally constituted political parties, including opposition political parties, which should be given a status under national law.

Chapter 4

Democracy, Rule of Law and Human Rights

Article 4

1. State Parties shall commit themselves to promote democracy, the principle of the rule of law and human rights.

2. State Parties shall recognize popular participation through universal suffrage as the inalienable right of the people.

VI. The Dar Es Salaam Declaration on budget transparency, accountability and participation, 18 November 2011 (excerpts)⁶

The world we want.

It is often the case that citizens, and particularly those most marginalized, are excluded from participating in public budget decisions. It is both essential and possible to transform this current paradigm, by adhering to the following core principles:

- Public budgets must be transparent, meaning that all information related to the way in which public money is raised, allocated, spent and accounted should be made available to the general public in an accessible, timely and comprehensible way.
- Budget processes must be inclusive, ensuring open and ample opportunities for all citizens to fulfill their right to know about, participate in, and influence all decisions with regard to the collection, allocation and management of public funds.
- Budgets must be raised and spent efficiently, effectively, and equitably and must ensure that public resources achieve the greatest impact possible, in the elimination of poverty and the achievement of equity.
- Budget data must be accurate, relying on publicly known estimates and ensuring that governments spend public monies on the priorities for which they were approved, thereby reducing the room for leakages, corruption and inefficiencies.
- Budgets have to be comprehensive, encompassing all revenues and expenditures, regardless of their origin -- including international aid, para-statal funds and the management of internal and external debt.
- Budgets have to be sustainable, ensuring that public finances serve common objectives over the long term, for current and future generations.
- Budgets have to be regularly and consistently reported against by all levels of government.

⁶ http://www.aefgh.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=104:the-dar-es-salaam-declaration-on-budget-transparency-accountability-and-participation&catid=1:latest-news&Itemid=2

- Budgets must be the object of permanent monitoring, oversight and accountability by legislatures, internal and external audit institutions, the media and citizens.

We call upon:

All governments at the national and subnational levels to:

1. Recognize, legislate, enact and operationalize the right to information generally and to public budget information specifically;
2. Actively engage citizens and all other stakeholders in setting public budget priorities-- including para-statal and para-fiscal funds-- as early and inclusively as possible,
3. Produce, and publicly discuss, in a timely fashion, at least eight key budget documents: re-budget statement, executive's budget proposal, enacted budget, citizens budget, in-year report, mid-year review, end-year report, audit report;
4. Comprehensively report on all public financial flows and institutions, including those that are managed outside of the formal budget process;
5. Include all resources used for the implementation of public, fiscal and economic policies, regardless of their origin, in their public budget documents and processes;
6. Ensure that legislatures and auditors are independent of government and have sufficient resources to increase their capacity and thus fulfill their oversight mandates effectively.
7. Publish and disseminate budget information in easy and accessible formats through all possible means, including digital open data formats through the internet, public libraries, information centers, etc.

VII. European Grid Declaration on Transparency and Public Participation, 5 December 2012 (excerpts)⁷

1.1 The Parties aim to improve the public acceptability of grid development to accommodate renewable energy in Europe, by increasing transparency and enabling public participation. Trustful cooperation is the basis to deliver solutions jointly for best practice in grid planning processes.

1.2 The Parties recognise the need to undertake suitable initiatives to improve public acceptability, and jointly to communicate the necessity of grid development in the transition towards renewable energy. These steps are needed so that:

- renewable electricity generation is not constrained by bottlenecks in the transmission system; and
- plans and investments to accommodate renewable energy enjoy greater understanding, provoke less public opposition and encounter fewer delays.

1.3 The Parties recommend adapting planning and permitting practices so that:

- investments are planned, consented and undertaken in a more transparent way;
- stakeholders have access to all relevant information that they need to form and express their views;

⁷ http://renewables-grid.eu/fileadmin/user_upload/Files_RGI/European_Grid_Declaration_2nd_Part.pdf

- there are opportunities for dialogue and participation as well as formal consultation processes in place for stakeholders' and the public's knowledge and views to be expressed, at a point in time when their input can still be taken into account;

3.1 Coherent need definition at EU and national levels

3.1.1 The Parties agree it is desirable to establish the need for new infrastructure development through consistent, coherent and transparent methodologies and participation/consultation processes, including at EU and national levels.

3.1.2 They also recognise the benefits of public participation and consultation at these levels, in order to build support for later, more local planning procedures.

3.6 Early and continuous involvement to allow substantial participation.

3.6.1 Ensuring that stakeholder and local knowledge are brought into the discussions at an early stage can lead to decisions which are supported by a broader community. In addition, the involvement of stakeholders, including relevant authorities at an early stage can reduce later disagreements and delays.

The Parties therefore agree on the desirability and need to:

- engage with stakeholders and the public at an early point in the process so that their contributions can be taken into account and plans modified accordingly where appropriate, without risking another loss in time; this may require engagement before official procedures are initiated.
- ensure that in time of public consultation phases, sufficient information and time are provided to enable substantial input, and that time is allocated to discuss and to explain resulting decisions.
- support the implementation of decision-making processes that enable and promote the consideration of reasonable alternatives suggested by the public, where these are relevant to the stage of decision-making in question.
- promote opportunities to engage in ways that are convenient and effective for as many as possible in society; this can be achieved by developing a "concept for public participation" for each project, with detailed stakeholder mapping and identifying channels and formats to involve them from an early stage.
- promote the establishment, where necessary, and support the work of (i) strategic multistakeholder working groups to deal with questions of general relevance for grid development, and (ii) project-specific working groups specifically to find solutions on topics of local concern.

3.7 Dialogue as a means to enhance relationships and build trust

3.7.1 The Parties recognise that a culture of dialogue, debate and collaboration is necessary to find solutions that are widely acceptable. They therefore seek to:

- promote a culture of dialogue and debate, e.g. by including elements of direct dialogue and deliberation in participation concepts, and improving communication of the solutions found through participation and consultation procedures.
- professionally organise dialogue and, especially in situations of conflict or high potential for conflict, consider the use of independent facilitation to help ensure deliberations are as constructive as possible.

VIII. Declaration of the Social Movements Assembly of the World Social Forum, Tunisia, 29 March 2013 (excerpts)⁸

People all over the world are suffering the effects of the aggravation of a profound crisis of capitalism, in which its agents (banks, transnational corporations, media conglomerates, international institutions, and governments complicit with neoliberalism) aim at increasing their profits by applying interventionist and neocolonial policies.

War, military occupations, free-trade neoliberal treaties and “austerity measures” are expressed in economic packages that privatise the common good and public services, cut wages and rights, increase unemployment, overload women's care work and destroys nature.

Such policies strike the richer countries of the [global] North harder and are increasing migration, forced displacement, evictions, debt and social inequalities such as in Greece, Cyprus, Portugal, Italy, Ireland and the Spanish state.

They reinforce conservatism and the control over women's bodies and lives. In addition, they seek to impose “green economy” as a solution to the environmental and food crisis, which not only exacerbates the problem, but leads to commodification, privatisation and financialisation of life and nature.

We denounce the intensification of repression to people's rebellions, the assassination of the leadership of social movements, the criminalisation of our struggles and our proposals.

We assert that people must not continue to pay for this systemic crisis (...) This is why we, social movements, struggle:

Against transnational corporations and the financial system (IMF, WB and WTO), which are the main agents of the capitalist system, privatising life, public services and common goods such as water, air, land, seeds and mineral resources, promoting wars and violations of human rights. Transnational corporations reproduce extractionist practices endangering life and nature, grabbing our lands and developing genetically modified seeds and food, taking away the peoples' right to food and destroying biodiversity.

We fight for the cancellation of illegitimate and odious debt which today is a global instrument of domination, repression and economic and financial strangulation of people. We reject free trade agreements that are imposed by States and transnational corporations and we affirm that it is possible to build another kind of globalisation, made from and by the people, based on solidarity and on freedom of movement for all the human beings.

For climate justice and food sovereignty, because we know that global climate change is a product of the capitalist system of production, distribution and consumption. Transnational corporations, international financial institutions and governments serving them do not want to reduce greenhouse gases. We denounce “green economy” and refuse false solutions to the climate crisis such as biofuels, genetically modified organisms and mechanisms of the carbon market like REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), which ensnare impoverished peoples with false promises of progress while privatising and commodifying the forests and territories where these peoples have been living for thousands of years.

We defend the food sovereignty and support sustainable peasant agriculture which is the true solution to the food and climate crises and includes access to land for all who work on it. Because of this, we call for a mass mobilisation to stop the landgrab and support local peasants struggles.

⁸ <http://occupywallst.org/tag/global%20solidarity/>

Against violence against women, often conducted in militarily occupied territories, but also violence affecting women who are criminalised for taking part in social struggles. We fight against domestic and sexual violence perpetrated on women because they are considered objects or goods, because the sovereignty of their bodies and minds is not acknowledged. We fight against the traffic of women, girls and boys.

For peace and against war, colonialism, occupations and the militarisation of our lands. We denounce the false discourse of human rights defence and fight against fundamentalism, that often justifies military occupations such as in Haiti, Líbia, Mali and Syria. We defend the right to people's sovereignty and self-determination such as in Palestine, Western Sahara and Kurdistan. We denounce the installation of foreign military bases to instigate conflicts, to control and ransack natural resources, and to foster dictatorships in several countries.

IX. Universal Declaration for the Common Good of Humanity (excerpts)⁹

Article 7 (To promote dignified and non-exploitative labor)

Processes of production and circulation should ensure workers a dignified, participatory job that is adaptive to family and cultural life, that fosters their skills and ensures them an adequate material existence. All modern forms of slavery, servitude and labor exploitation, especially of children, for the purposes of individual profit or private accumulation of surplus value as well as limitations on labor organizing are inconsistent with the Common Good of Humanity and Good Life (Buen Vivir) and are therefore prohibited.

Article 8 (To reconstruct territories)

Facing "globalization" which has favored a unipolar economy, the concentration of decision-making powers, the hegemony of financial capital and the irrational circulation of goods and services, it is indispensable to reconstruct territories as a base for food, energetic sovereignty and for the main exchanges, to regionalize economies and base them on principles of complementarity and solidarity; and for the peripheral regions, to "disconnect" from the hegemonic economic center, in order to assure commercial, financial and productive autonomy. The constitution of monopolies and oligopolies, whatever their area of productive or financial activity is, is inconsistent with the Common Good of Humanity and are therefore prohibited.

Article 9 (To guarantee access to common goods and universal social protection)

There are certain common goods that are indispensable for the collective life of individuals and peoples and that constitute inalienable rights. These are: food, housing, health, education, and material and immaterial communication. Various forms of citizen control or social property exist for the effective organization of access to these goods. "Universal protection" is a right of all peoples and individuals, a responsibility of public authorities that should be assured by an adequate fiscal policy. The privatization of public services in order to contribute to capital accumulation is inconsistent with the Common Good of Humanity and is therefore prohibited. The following are susceptible for sanctions: speculating on food, housing, health, education, communication as is corruption while exercising these rights.

⁹ <http://www.especieenpeligro.cult.cu/index.php/debates-y-alternativas/articulos/1521-universal-declaration-for-the>

Article 10 (To generalize democracy and the construction of the subject)

All peoples and human beings are subjects of their histories and have the right to a collective social and political organization that guarantees this. This organization must ensure harmony with nature and access to the material needs of life through production and circulation systems built on social justice principles. To achieve these goals, collective organization should allow everyone's participation in the production and reproduction of the life of the planet and human beings, i.e., of the Common Good of Humanity. The organizing principle of this goal is to spread democracy into all social relationships: family, gender, work, political authority, between peoples and nations and in all social, political, economic, cultural and religious institutions. Along with political forms of participatory democracy, participation should be organized in all sectors of common life, economic, social, cultural.

All non-democratic forms of organizing society's political, economic, social and cultural life are inconsistent with the Common Good of Humanity and the Good Life (Buen Vivir) and are therefore prohibited. Genocides are condemned as irreparable acts of discrimination. Susceptible to sanctions are all discriminations based on gender, race, nation, culture, sexual orientation, physical or mental capacity, religion or ideological affiliation. Along with political forms of participatory democracy, participation should be encouraged in all sectors of common life.

Article 11 (To build equality between men and women)

Particular importance will be given to relations between men and women, unequal since time immemorial in the various types of societies that have existed during human history. All institutions and all social and cultural systems should recognize, respect and promote the right to a life in plenitude for women in equality with men. Social and economic practices, institutions and cultural or religious systems that defend discrimination or actively discriminate against women are inconsistent with the Common Good of Humanity. All forms of masculine domination, particularly differences in wage income and the non-recognition of family domestic work linked to the reproduction of life, are susceptible to sanctions.

Article 12 (To prohibit war)

Democratic international relations do not allow the use of war to resolve conflicts. In this day and age, peace is not guaranteed by an arms race. The availability of nuclear, biological, chemical weapons directly jeopardizes the life of Humanity. Arms have become a business. Their production causes an enormous waste of energy, natural resources and human talents; their use means, aside from the loss of lives, serious environmental destruction.

The manufacture, possession and use of weapons of mass destruction, the accumulation of conventional weapons to guarantee regional hegemony and control of natural resources, hegemonic regional pacts, military solutions to solve internal political problems are inconsistent with the Common Good of Humanity and are therefore prohibited.

Article 13 (To build the State on the basis of Common Good)

The role of the State, as collective administrator, is to guarantee the Common Good, i.e. the public interest, as compared to individual or private interests. Democratic participation is therefore needed to define the Common Good (constitutions) and how it will be applied. All peoples and communities of the earth, in the plurality of each of their members, organizations and social movements, have the right to political systems of direct or delegated participation with a revocable mandate. Regional governments and international

organizations, particularly the United Nations, must be constructed on democratic principles. The same is true for all institutions that represent specific interests or business sectors, such as industrial companies, estates, financial or commercial organisms, political parties, religious institutions or trade unions, NGOs, sports or cultural groups, humanitarian organizations.

All dictatorial or authoritarian forms of exercising political or economic power, where no representative minorities, formal or informal, monopolize decisions without participation, initiative or popular control, are inconsistent with the Common Good of Humanity and are therefore prohibited. Also prohibited are public subsidies for organizations, social movements, political parties or religious institutions that do not respect democratic principles or that practice gender or racial discrimination.

X. Paris Appeal for a New Democratic International Economic Order, International Association of Democratic Lawyers, 25 May 2013 (excerpts)¹⁰

We, democratic lawyers, recognize the United Nations Charter along with the Universal Declaration of Human Rights and the UN Conventions on Human Rights constitute the Constitution of the modern world. These important documents prohibit the threat of and use of force, recognize the sovereign equality of states and the right of self-determination, and guarantee that everyone has the right to a social and international order in which the rights and freedoms in the Universal Declaration of Human Rights can be fully realized.

The United Nations Charter in its Preamble replaced the old vertical logic of power over peoples by horizontally organizing power of the peoples based on the exercise of and respect for self-determination and their exclusive mastery over their own affairs in equality and universality. However, the economic management of the world has been “entrusted” by the Bretton Woods agreements to international financial institutions, but these institutions are based on the old vertical logic of power over the peoples that do not comply with the principal of equality and universality. This has allowed the peoples of the world to be diverted from their mission as States with the economic power of these institutions being used as instruments of domination and policing in their own self-interest and the interest of large economies.

Peoples’ power requires not only the first generation of civil and political rights but also the second generation of Economic, Social and Cultural Rights. Peoples’ Power cannot be complete without economic power.

The conclusion from the experience of decolonization necessitated the adoption of the United Nations Resolution of 1971 proclaiming peoples’ sovereignty over their natural resources. However, it became clear that even with such resolutions peoples remain dependent because of the so-called “laws” of the market with its domination by industrial and financial monopolies, continue undermine the Human Rights Covenants and raise public debt.

We have been denouncing for decades not only the injustice and illegitimacy of the public debt of developing countries but also its illegality and nullity.

Today the inequality bequeathed by colonialism and maintained by the post colonialism remains unbearable, the public debt is now a heavy burden on the economies of the majority of states and leads them to inflict austerity policies on their people to the detriment of the necessary satisfaction of their most basic economic, social and cultural rights as

¹⁰ <http://www.iadllaw.org/>

proclaimed by the United Nations Covenant in 1966. These policies violate the social development goals defined by Articles 55 *et seq.*, of the United Nations Charter and confirmed by U.N. General Assembly Resolution of 4 December 1986 on the Right to Development.

The result is a fundamental economic political and societal crisis on a scale constituting a crisis of civilization, posing the most serious dangers to humanity.

However, this situation is not an accident of fate. It is the result of the management of the world's economy, based on the savagery of economic liberalism and the resulting dictatorship of financial markets. The world's economy is governed by a system which exploits the world's resources, not as a function of their value to humanity but of their value as profit for finance capital.

Even the so-called "local conflicts" are in fact conflicts between the powers that compete for resources and markets, in which the arms trade plays a particularly burdensome role. Massive violations of human rights that appear as purely internal are most often the work of dictatorships established by the neo-colonizer guaranteeing them economic mastery and security of access to resources and markets.

The future of Humanity is at stake as long as the political power of the peoples is not completed by their economic power. This completion will permit placing the organization of world economic management under international universal and egalitarian law of the United Nations Charter and replacing non-egalitarian International financial institutions by people's instruments of cooperation allowing the planet's resources to be directed to the exclusive satisfaction of peoples' and the environments respective and common needs.

We believe that the world's lawyers should serve the people in the front line of this struggle, which calls on them to use and improve their professional skills in the service of peoples to achieve the common goal of Peoples' Power. We have therefore decided to establish a permanent consultative working group to define those steps which should be taken immediately to counter effectively the malfunctioning of the current order and towards establishing a new democratic international economic order.

XI. Appel de Blois, Liberté pour l'histoire, 2008 (full text)¹¹

Concerned about the retrospective moralization of history and intellectual censure, we call for the mobilization of European historians and for the wisdom of politicians. History must not be a slave to contemporary politics nor can it be written on the command of competing memories. In a free state, no political authority has the right to define historical truth and to restrain the freedom of the historian with the threat of penal sanctions.

We call on historians to marshal their forces within each of their countries and to create structures similar to our own, and, for the time being, to individually sign the present appeal, to put a stop to this movement toward laws aimed at controlling history memory. We ask government authorities to recognize that, while they are responsible for the maintenance of the collective memory, they must not establish, by law and for the past, an official truth whose legal application can carry serious consequences for the profession of history and for intellectual liberty in general. In a democracy, liberty for history is liberty for all.

¹¹ http://www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=14&lang=en

XII. Declaration on Digital Freedom, Adopted by the PEN International Congress Gyeongju, South Korea, September 2012 (full text)¹²

PEN International promotes literature and freedom of expression and is governed by the PEN Charter and the principles it embodies unhampered transmission of thought within each nation and between all nations.

PEN recognizes the promise of digital media as a means of fulfilling the fundamental right of free expression. At the same time, poets, playwrights, essayists, novelists, writers, bloggers, and journalists are suffering violations of their right to freedom of expression for using digital media. Citizens in many countries have faced severe restrictions in their access to and use of digital media, while governments have exploited digital technologies to suppress freedom of expression and to surveil individuals. The private sector and technology companies in particular have at times facilitated government censorship and surveillance. PEN therefore declares the following:

1. All persons have the right to express themselves freely through digital media without fear of reprisal or persecution.
 - a. Individuals who use digital media enjoy full freedom of expression protections under international laws and standards
 - b. Governments must not prosecute individuals or exact reprisals upon individuals who convey information, opinions, or ideas through digital media.
 - c. Governments must actively protect freedom of expression on digital media by enacting and enforcing effective laws and standards.
2. All persons have the right to seek and receive information through digital media.
 - a. Governments should not censor, restrict, or control the content of digital media, including content from domestic and international sources.
 - b. In exceptional circumstances, any limitations on the content of digital media must adhere to international laws and standards that govern the limits of freedom of expression, such as incitement to violence.
 - c. Governments should not block access to or restrict the use of digital media, even during periods of unrest or crisis. Controlling access to digital media, especially on a broad scale, inherently violates the right to freedom of expression.
 - d. Governments should foster and promote full access to digital media for all persons.
3. All persons have the right to be free from government surveillance of digital media.
 - a. Surveillance, whether or not known by the specific intended target, chills speech by establishing the potential for persecution and the fear of reprisals. When known, surveillance fosters a climate of self-censorship that further harms free expression.
 - b. As a general rule, governments should not seek to access digital communications between or among private individuals, nor should they monitor individual use of digital media, track the movements of individuals through digital media, alter the expression of individuals, or generally surveil individuals.
 - c. When governments do conduct surveillance in exceptional circumstances and in connection with legitimate law enforcement or national security investigations—

¹² <http://www.pen-international.org/pen-declaration-on-digital-freedom/>

any surveillance of individuals and monitoring of communications via digital media must meet international due process laws and standards that apply to lawful searches, such as obtaining a warrant by a court order.

d. Full freedom of expression entails a right to privacy; all existing international laws and standards of privacy apply to digital media, and new laws and standards and protections may be required.

e. Government gathering and retention of data and other information generated by digital media, including data mining, should meet international laws and standards of privacy, such as requirements that the data retention be time-limited, proportionate, and provide effective notice to persons affected.

4. The private sector, and technology companies, in particular, are bound by the right to freedom of expression and human rights.

a. The principles stated in this declaration equally apply to the private sector.

b. Companies must respect human rights, including the right to freedom of expression, and must uphold these rights even when national laws and regulations do not protect them.

c. Technology companies have a duty to determine how their products, services, and policies impact human rights in the countries in which they intend to operate. If violations are likely, or violations may be inextricably linked to the use of products or services, the companies should modify or withdraw their proposed plans in order to respect human rights.

d. Technology companies should incorporate freedom of expression principles into core operations, such as product designs with built-in privacy protections.

e. If their operations are found to have violated the right to freedom of expression, technology companies should provide restitution to those whose rights were violated, even when governments do not provide remedies.

XIII. Final Report of the Sub-Commission's Special Rapporteur on Treaties with Indigenous Peoples, Miguel Alfonso Martinez, 1999 (excerpts)¹³

306. Earlier in the present report (para. 261) the Special Rapporteur noted the generalized opinion that, in the light of the situation endured by indigenous peoples today, the existing mechanisms, either administrative or judicial, within non-indigenous spheres of government have been incapable of solving their difficult predicament. This forces him to advance a number of recommendations on this subject.

307. He first recommends the establishment within States with a sizeable indigenous population of an entirely new, special jurisdiction to deal exclusively with indigenous issues, independent of existing governmental (central or otherwise) structures, although financed by public funds, that will gradually replace the existing bureaucratic/administrative government branches now in charge of those issues.

308. This special jurisdiction, in his view, should have four distinct specialized branches (permanent and with adequate professional staffing):

(i) an advisory conflict-resolution body to which all disputes, including those relating to treaty implementation, arising between indigenous peoples and non-indigenous individuals, entities and institutions (including government institutions)

¹³ <http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/696c51cf6f20b8bc802567c4003793ec>

should be mandatorily submitted, and which should be empowered to encourage and conduct negotiations between the interested parties and to issue the recommendations considered pertinent to resolve the controversy;

(ii) a body to draft, through negotiations with the indigenous peoples concerned: (a) new juridical bilateral, consensual, legal instruments with the indigenous peoples interested and (b) new legislation and other proposals to be submitted to the proper legislative and administrative government branches in order gradually to create a new institutionalized legal order applicable to all indigenous issues and that accords with the needs of indigenous peoples;

(iii) a judicial collegiate body, to which all cases that after a reasonable period of time have not been resolved through the recommendations of the advisory body, should be mandatorily submitted. Such a body should be empowered to adjudicate these cases and should be capable of making its final decisions enforceable by making use of the coercive power of the State;

(iv) an administrative branch in charge of all logistical aspects of indigenous/non-indigenous relations.

309. The Special Rapporteur is fully aware of many of the obstacles that such an innovative, far-reaching approach might encounter. To mention only one, it is not difficult to appreciate the many vested interests that might be affected by the redundancy of the structures now existing to deal with indigenous issues in many countries. Only strong political determination, particularly on the part of the leadership of the non-indigenous sector of the society, can make this approach viable. One other essential element is also clear: the effective participation of indigenous peoples - preferably on a basis of equality with non-indigenous people - in all four of the recommended branches is absolutely central to the "philosophy" presiding over the Special Rapporteur's overall approach to this question.

310. It is obvious that the above is a mere sketch of the new institutionality recommended. Much lies ahead in terms of filling in its quite visible lacunae. While the Special Rapporteur does not lack ideas on how to fill some of the gaps, he has considered it wise to allow for the required fine-tuning to be done at a later stage, around a negotiating table, by the interested parties themselves in the different countries. The way in which such a negotiation process is organized and conducted may well be the true litmus test eventually of the merits of his recommendation and of the viability of the structure proposed in a given socio-political context.

311. In advancing the recommendations set forth above, the Special Rapporteur has benefited from the highly interesting ideas on the same subject formulated in the final report (1996) of the Royal Commission on Aboriginal Peoples established by the Government of Canada. (71)

312. While it is generally held that contentious issues arising from treaties or constructive arrangements involving indigenous peoples should be discussed in the domestic realm, the international dimension of the treaty nevertheless warrants proper consideration.

313. A crucial question relates to the desirability of an international adjudication mechanism to handle claims or complaints from indigenous peoples, in particular those arising from treaties and constructive arrangements with an international status.

314. The Special Rapporteur is quite familiar with the reticence expressed time and again, by States towards the question of taking these issues back to open discussion and decision-making by international forums. In fact, he might even agree with them that for certain issues (for example, disputes not related to treaty implementation and observance) it

would be more productive to keep their review and decision exclusively within domestic jurisdiction until this is completely exhausted.

315. However, he is of the opinion that one should not dismiss outright the notion of possible benefits to be reaped from the establishment of an international body (for example, the proposed permanent forum of indigenous peoples) that, under certain circumstances, might be empowered - with the previous blanket acquiescence, or acquiescence on an ad hoc basis, of the State concerned - to take charge of final decision in a dispute between the indigenous peoples living within the borders of a modern State and non-indigenous institutions, including State institutions.

316. At any rate, the Special Rapporteur recommends that a United Nations-sponsored workshop be convened, at the earliest possible date and within the framework of the International Decade of the World's Indigenous People, to open an educated discussion on the possible merits and demerits of the establishment of such an international body.

317. One last point on the subject: with the growing international concern about all human rights and related developments, one element appears very clear in the mind of the Special Rapporteur: the more effective and developed the national mechanisms for conflict resolution on indigenous issues are, the less need there will be for establishing an international body for that purpose. The opposite is also true: the non-existence, malfunctioning, anti-indigenous discriminatory approach or ineffectiveness of those national institutions will provide more valid arguments for international options. This may be one of the strongest arguments possible for the establishment (or strengthening) of proper, effective internal channels for the implementation/observance of indigenous rights and conflict resolution of indigenous-related issues.

318. Another recommendation which it seems timely to address to State institutions empowered to deal with indigenous issues is that, in the decision-making process on issues of interest to indigenous peoples, they should apply and construct (or continue to do so) the provisions of national legislation and international standards and instruments in the most favourable way for indigenous peoples, particularly, in cases relating to treaty rights. In all cases of treaty/agreement/constructive arrangement relationships, the interpretation of the indigenous party of the provisions of those instruments should be accorded equal value with non-indigenous interpretation of the same provisions.

319. The Special Rapporteur also recommends the fullest possible implementation in good faith of the provisions of treaties/agreements between indigenous peoples and States, where they exist, from the perspective of seeking both justice and reconciliation. In the event that the very existence (or present-day validity) of a treaty becomes a matter of dispute, a formal recognition of that instrument as a legal point of reference in the State's relations with the peoples concerned would contribute greatly to a process of confidence-building that may bring substantial benefits. In this context, the completion of the ratification process of draft treaties/agreements already fully negotiated with indigenous people is strongly recommended by the Special Rapporteur.

320. In the case of obligations established in bilateral or multilateral treaties concluded by States - to which indigenous peoples are third parties - that may affect those peoples, the Special Rapporteur recommends that the State parties to such instruments seek the free and educated acquiescence of the indigenous parties before attempting to enforce those obligations.

XIV. The realization of economic, social and cultural rights, Final report submitted by Mr. Danilo Türk, Special Rapporteur, E/CN.4/Sub.2/1992/16, 3 July 1992 (excerpts)¹⁴

177. Decades of pleas for increasing levels of participation in the development process, principles about which are included, for instance, in the 1986 Declaration on the Right to Development, have clearly yet to bear fruit.

178. According to one commentator: "Though the World Bank claims that 'it seeks to meet the needs of the poorest people', at no stage in what it refers to as 'the project cycle', however, does it actually take time to ask the poor themselves how they perceive their needs; neither does it canvass their views on how they feel these needs might best be met. Indeed, from the identification of a possible Bank project right through to its ex post evaluation, the poor are entirely left out of the decision-making process - almost as if they did not exist".

179. Even the Bank itself has recognized this inadequacy, admitting in 1988 that: "the principles guiding beneficiary participation in Bank-financed projects have been quite abstract and of limited operational impact. Beneficiaries were not assigned a role in the decision-making process, nor was their technological knowledge sought prior to designing project components". Though non-governmental organization participation in World Bank projects has increased in the past three years, by far the greatest share of this "participation" was in project implementation, with substantially smaller emphasis being placed on design, advice, monitoring and evaluation.

180. The declining capacities of the State and the resolute inability of the market or private sector, coupled with measures of adjustment, and an overall global economic decline have led to the evolution of new citizen movements, new coalitions and new political processes, all but ignored in the literature of the international financial agencies and by much of the United Nations system. Within these new movements is where real participation occurs, where much of real development takes place and where the legitimate needs of people are increasingly being demanded.

181. Much debate has taken place recently about the obvious relationship between development, democracy and human rights, implying, of course, the issue of citizen participation in all political processes associated with development. One United Nations agency has provided support in the following terms: "An essential part of any political process to benefit the poor is a high degree of participation. Encouraging the autonomy of citizens is, indeed, an end in itself. And participation is a means to ensure the efficient provision and more equitable distribution of goods and services. If people are involved in decision-making, policies and projects tend to be more realistic, more pragmatic and more sustainable."

¹⁴ <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/E.CN.4.Sub.2.1992.16.En?Opendocument>